

## Datos del Expediente

**Carátula:** CORNEJO PEDRO JOSE Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS

**Fecha inicio:** 02/02/2024

**N° de Receptoría:** TL - 199 - 2024

**N° de Expediente:** 15624

**Estado:** Elevado a Cámara

### Pasos procesales:

Fecha: 20/03/2026 - Trámite: SENTENCIA - ( FIRMADO )

[Anterior](#) 20/03/2026 14:08:39 - SENTENCIA [Siguiente](#)

### REFERENCIAS

**Domic. Electrónico de Parte Involucrada** 20172080635@notificaciones.scba.gov.ar

**Domic. Electrónico de Parte Involucrada** 27316707527@notificaciones.scba.gov.ar

**Funcionario Firmante** 20/03/2026 14:08:31 - GERMAIN Pablo Cristian - JUEZ

**Nro. Notificación Electrónica** 142607766

**Nro. Notificación Electrónica** 142607767

-- NOTIFICACION ELECTRONICA

**Fecha de Libramiento:** 20/03/2026 14:30:52

**Fecha de Notificación** 20/03/2026 14:37:03

**Notificado por** CRESPO GERARDO

-- REGISTRACION ELECTRONICA

**Año Registro Electrónico** 2026

**Código de Acceso Registro Electrónico** CC771F1D

**Fecha y Hora Registro** 20/03/2026 14:30:13

**Número Registro Electrónico** 68

**Prefijo Registro Electrónico** RS

**Registración Pública** SI

**Registrado por** CRESPO GERARDO

**Registro Electrónico** REGISTRO DE SENTENCIAS

### Texto del Proveído

----- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea) -----

15624 - CORNEJO PEDRO JOSE Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS.-

Trenque Lauquen, en el día de la firma digital-

### VISTOS

Los autos "Cornejo, Pedro José y otros c/ Municipalidad de Daireaoux s/ Pretensión anulatoria", expte. N° 15.624 en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1.-

### RESULTA

1.- El 2.2.24 se presentó el Dr. Jorge E. Moroni, en representación de Pedro José Cornejo, El Matico SA, Susana De la Serna y SACFIL SA, y promovió demanda contra la Municipalidad de Daireaoux.-

Relata que Pedro José Cornejo es titular de las siguientes partidas inmobiliarias: i) N° 019-000616-6, parcela 570 A, de 372,5746 has; ii) N° 019-006227-9, par. 538 A, de 313,1133 has; iii) N° 019-006226-0, par. 536 A, de 284,0019 has; y iv) N° 019-002203-0, par. 534 A, de 217,9012 has, todas situadas en el partido de Daireaoux.-

Expone que El Matico SA es titular de las partidas inmobiliarias: i) N° 019-000614-0 par. 569, de 375 has; y ii) N° 019-000611-5, par. 568, de 375 has, ambas en el partido de Daireaoux.-

Susana De la Serna es titular de las partidas inmobiliarias: i) N° 019-004096- 8, circ. 7, par. 343 D; ii) N° 019-009985-7, circ. 7, par. 349 B; y iii) N° 019-000092-3, circ 7, par. 349 A, todas del partido de Daireaoux.-

SACFIL SA es titular de los siguientes inmuebles cuyos datos catastrales son: i) circ. 06, partida municipal N° 0063300, par. 325 C; ii) circ. 06, partida municipal N° 0004900, par. 269 F; iii) circ. 06, partida municipal N° 0046200, par. 318; iv) circ. 06, partida municipal N° 0046201, par. 322; v) circ. 06, partida municipal N° 0129000, par. 269 G; y vi) circ. 06, partida municipal N° 0032000, par. 316 todas del partido de Daireaoux.-

Afirma que sus representados son titulares registrales y contribuyentes de la municipalidad de Daireaux por las tasas de mantenimiento de la red vial, situación que puede ser constatada por la demandada.-

Expone la competencia del fuero contencioso administrativo.-

Plantea pretensión anulatoria:

i) de todos los actos administrativos formales de alcance particular dictados por el Intendente de la municipalidad demandada en los exptes. adm. nros. 422-12542/2022; 422-12543/2022, 422-12539/2022, y 422-12536/2022;

ii) de los arts. 157 a 162 de la ordenanzas fiscal --en adelante "OF"-- N° 618/97, correspondiente a los ejercicios 2022, 2023 y 2024;

iii) de las ordenanzas impositivas (en adelante "OI"), anulación del art. 21 referido a la tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal de las OI 2022 y 2023, y art. 20 de la OI 2024, y de toda otra norma concordante, modificatoria, sustitutiva o complementaria correspondientes a las OI de los ejercicios fiscales mencionados;

iii) del Cap. XIV art. 19 sobre tasa de guías de la OI 2024; y,

iv) junto a la la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los tributos, imposiciones y las normas que los instituyen.-

Solicita se ordene a la demandada a acompañar los expedientes administrativos mencionados a fin de modificar y/o ampliar la demanda, y las OF y OI cuestionadas a fin del dictado de la medida cautelar solicitada.-

Solicita el dictado de medida cautelar que ordene la suspensión del pago de la tasa cuestionada hasta el dictado de sentencia firme.-

Afirma que en el presente caso no es aplicable el instituto del *solvet et repete* previsto por el artículo 19 del CCA.-

Expone que sus representados viven de la producción agropecuaria, realizándola en forma directa o indirecta a través de terceros, en tierras propias o ajenas.-

Señala que la afectación por parte del Estado de sus finanzas, trabajo, comercialización, comunicaciones, y finalmente sus ingresos y crecientes costos, hicieron que efectúen los reclamos por la deficiencia de las prestaciones públicas y la falta de obtención de servicios puntuales.-

Afirma que en el caso, la municipalidad de Daireaux fue dejando abandonada su obligación de cumplir con la debida y completa tarea de mantenimiento de los caminos rurales del partido.-

Expone que es un derecho elemental en el medio rural y para el ejercicio de toda industria lícita, recibir los servicios públicos de comunicación física y vial, ya que de ello depende la calidad de vida, la educación, la salud, el acceso a las provisiones e insumos de todo tipo, el transporte y la comercialización de los bienes inevitablemente físicos que produce el trabajo rural en sus diversas variantes.-

Afirma que la municipalidad de Daireaux, regula en la OF 618/97 vigente, la tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal, que se circunscribe a los caminos y calles rurales, municipales y provinciales de tierra, por antigua delegación del servicio de parte de la provincia de Buenos Aires a los municipios, regulada en los artículos 157 a 162, y en el artículo 21 de la OI, estableciendo además para cada período fiscal, los aumentos y ajustes, siempre con la misma estructura, del mismo modo y con las mismas falencias, pero cada año con aumentos más desmesurados.-

Indica que a las OF y OI corresponde agregarle la ord. 2.226/17 que creó el Fondo para Alteo de Caminos, cuyo artículo 3 prevé recursos de otras jurisdicciones --nación y provincia-- y otros como donaciones y aportes de los productores para el mismo fin.-

Señala que el recurso principal de otra jurisdicción que recibe la comuna, es por coparticipación provincial, legislado en la ley 13.010, no para hacer un fondo para alteo, sino para atender al servicio general de vialidad municipal, ya que se trata de una porción del impuesto inmobiliario rural que la provincia recauda por las parcelas catastrales comprendidas en el ámbito territorial de cada municipio.-

Expone que dicho fondo está en el orden del 12% del total que se le transfiere, según artículo 1, inciso b), 2, 3, 4 y 5 de la ley 13.403.-

Afirma que tratar el fondo para “alteo” como lo hace el municipio es una forma de cambiar su destino debido a que la intención provincial legal apunta a mejorar el servicio general de vialidad local.-

Expone que el municipio al sustraer el recurso puede imputar el total de los costos a cargo de la tasa, pasando a recaudar más de lo previsto para la prestación del servicio ya que suma los dos recursos, pero sustrae esa coparticipación expresa de su destino para usar los fondos para otros fines o para rentas generales.-

Manifiesta que iniciaron acciones de naturaleza administrativa ante la municipalidad, donde plantearon la mayor parte de las irregularidades que pudieron deducir y comprobar sobre el accionar municipal.-

Afirma que la falta de prestación del servicio es de fácil comprobación con solo recorrer y transitar los caminos rurales de Daireaux.-

Expone que en los expedientes administrativos ofrecidos como prueba, le han reclamado al municipio reiterada y fundadamente que procediera a probar su afirmación de haber cumplido con la atención del servicio, ello atento que la prueba de la prestación del servicio está a cargo del Estado conforme doctrina de la CSJN.-

Indica que el municipio no solo no procedió a tal tarea, sino que tampoco hizo lugar a la prueba ofrecida, que servía al menos de prueba complementaria de la suya, o sencillamente representaría la única prueba en la causa, sino que se limitó al anacrónico argumento meramente dogmático sobre la existencia de la organización municipal, la de un presupuesto y la de contar con los elementos, para rechazar los recursos administrativos.-

Solicita que la demandada sea quien se encargue de probar la prestación del servicio.-

Afirma que el municipio no puso a su disposición para realizar un análisis contable, la documentación propia y esencial de su tarea de administración, en violación del deber de transparencia y publicidad de gestión impuesta por la Ley Orgánica Municipal (LOM).-

Cita jurisprudencia y ofrecen prueba.-

Señala que han planteado una cuestión de naturaleza estrictamente constitucional, de puro derecho, fundados en la verdadera naturaleza del gravamen cuestionado, y solicitan la declaración de inconstitucionalidad de la tasa cuestionada.-

Denuncia la conducta indiferente, violatoria de garantías, negatoria de derechos que en forma sistemática ha desarrollado la demandada en su integridad, no solo por parte del Intendente sino de los distintos funcionarios intervinientes, así como el Departamento Deliberativo, y realizan reserva de las vías procesales que permitan efectuar un reclamo por responsabilidad a todos los que les corresponda.-

Expone que el artículo 20 del Capítulo XV de la OI 2024 dispone un aumento desmesurado de la tasa por mantenimiento, conservación y mejorado de la red vial en el orden del 340% respecto del ejercicio 2023, que violan las garantías de razonabilidad tributaria establecidas por la CSJN.-

Afirma que los ajustes por inflación y desvalorización monetaria están prohibidos en la legislación argentina y solo la justicia en casos especiales puede otorgarlos.-

Indica que el artículo 19 *in fine* del Capítulo XIV de la OI 2024, al tratar la tasa por control de marcas y señales, conocida como tasa de “guías”, ha establecido que: *“Para acceder a los derechos del presente capítulo los contribuyentes no deberán registrar deuda alguna con el municipio y tener actualizado el stock de hacienda”*.-

Expone el origen de la tasa de guías y manifiesta que se cobra “por cabeza”, referencia que nada tiene que ver con la naturaleza y costo del servicio, tornándola irrazonable y desproporcionada, y además, percibiendo montos diferenciales según se trate de traslados dentro o fuera del partido, lo que constituye lisa y llanamente una aduana interior, en contra de la doctrina de la SCJBA en la causa "Tapera Arteche".

Solicita la inconstitucionalidad de la tasa que se impone de ese modo.-

Solicita la remisión urgente de los exptes. adm. nros. 422-12542/2022, 422-12543/2022, 422-12539/2022 y 422-121536/2022, y de los exptes. judiciales en trámite ante el Juzgado de Paz Letrado de Daireaux caratulados "Municipalidad de Daireaux c/ Cornejo, Pedro José s/ Apremio", nro. 16.057/23, "Municipalidad de Daireaux c/ El Matico SA s/ Apremio", nro. 16.056/23 y "Municipalidad de Daireaux c/ Sacfil s/ Apremio", nro. 16.055/23.-

Ofrece prueba, funda en derecho, hace reserva del caso federal y peticiona se haga lugar a la medida cautelar y posteriormente a la demanda, con costas.-

2.- Previa acreditación de la personería invocada por el letrado de los actores, el 6.2.24 se lo tuvo por presentado, parte y por promovidas las pretensiones anulatoria y de reconocimiento y restablecimiento de derechos, con pedido de medida cautelar.-

Se requirió a la demandada que en el plazo de 15 días remita los expedientes administrativos relacionados con la pretensión deducida y las ordenanzas fiscal y tributaria de los ejercicios 2022, 2023 y 2024, bajo apercibimiento de tener como base los hechos expuestos en el escrito de demanda.-

Se hizo saber que recibidos los exptes. adms. se efectuaría el análisis de admisibilidad de la demanda --art. 30 del CCA--.-

Asimismo, se requirió al municipio y al Presidente del HCD de Daireaux, a los fines de la medida cautelar y el pedido de levantamiento de embargo solicitados, que produzcan conforme lo previsto en el artículo 23 del CCA, un informe sobre los antecedentes y fundamentos de los hechos denunciados en la demanda referidos a la procedencia de la medida cautelar peticionada, ello en el plazo de cinco días, y que acompañen copia de los expedientes administrativos relacionados, de las normas aplicables a la situación planteada e informen todo dato de interés para la cuestión debatida.-

En relación a los expedientes judiciales indicados en demanda, se intimó a la parte actora a manifestar si se podían visualizar íntegramente a través de la MEV de la SCJBA, o en caso negativo, libre oficio al Juzgado de Paz Letrado de Daireaux a fin que remita los originales y/o copias certificadas.-

3.- El 8.2.24 los actores manifestaron que los exptes. judiciales pueden ser visualizados íntegramente por la MEV de la SCJBA.-

4.- El 12.3.24 se presentó la Dra. Aldana Peralta en representación de la Municipalidad de Daireaux y contestó el requerimiento efectuado.-

Acompañó en formato pdf copia de los exptes. adm. nros. 4022-12542/2022, 4022-12543/2022 y 4022-121536/2022 y de las OI de los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Plantea y fundamenta la inadmisibilidad de la medida cautelar solicitada en demanda.-

5.- Previa ratificación de la presentación efectuada, el 21.3.24 se tuvo por acreditada la personería invocada y por presentado el informe requerido.-

Se tuvo presente los exptes. adm. 4022-12542/2022, 4022-12543/2022, 4022-12536/2022 y las OI años 2022, 2023 y 2024.-

Se advirtió que no se acompañó el expte. adm. 4022-12539/2020 ni las OF correspondiente a los años 2022, 2023 y 2024.-

Por ello, se concedió a la demandada un plazo adicional de 5 días a fin de acompañar la documentación requerida.-

6.- El 3.4.24 la demandada acompañó en formato pdf copia del expediente administrativo 4022-12539/2020 y de la OF 618/97 vigente en los periodos 2022, 2023 y 2024.-

7.- El 4.4.24 se tuvo presente la documental acompañada.-

Se ordenó traslado a la parte actora de la documentación acompañada en los escritos del 12.3.24 y 4.4.24.-

Asimismo y en los términos del artículo 32 del CCA, se ordenó traslado por 15 días de los exptes. adm. nros 4022-12542/2022, 4022-12543/2022, 4022-12536/2022, 4022-12539/2020, de las OI años 2022, 2023 y 2024 y la OF 618/97, para que los actores amplíen o transformen la demanda.-

8.- El 25.4.24 se rechazó la medida cautelar solicitada.-

La resolución fue apelada por la parte actora --recurso del 6.5.24--, del cual se ordenó traslado --proveído del 6.5.24-- y fue contestado por la demandada el 9.5.24--.-

Cumplido los pasos legales, se ordenó la formación de incidente de apelación --expte. N° 16.130-- que fue elevado a la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín el 13.5.24.-

El 21.5.24 la Alzada confirmó la resolución.-

9.- El 3.5.24, vencido el plazo del traslado de los expedientes administrativos para que los actores amplíen o modifiquen la demanda, se realizó de oficio el análisis de admisibilidad de las pretensiones.-

Teniendo presente el objeto de la pretensión, se ordenó:

i) que la causa tramite como pretensión declarativa de certeza sobre la legitimidad de las ordenanzas cuestionadas, de reconocimiento de derechos y de nulidad sobre los actos administrativos individuales dictados en los exptes. adm. --arts. 12, inc.1, 2 y 4 CCA--; y

ii) traslado de la demanda por el plazo legal, requiriendo la notificación al municipio y al Honorable Concejo Deliberante, conforme lo dispone el art. 33 del CCA.-

Asimismo, se hizo saber a la demandada que, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida, deberá ofrecer prueba sobre la efectiva prestación del servicio que se vincula con la tasa impugnada, y en particular sobre los servicios efectivamente prestados en los períodos involucrados realizados en los caminos que vinculan a los inmuebles de los actores.-

10.- El 22.11.24 el municipio demandado contestó la demanda.-

Aclara que compete al Departamento Ejecutivo municipal la representación de la Municipalidad ante terceros y ante los tribunales de justicia, aún en el presente caso en el que se ataca una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante.-

Efectúa una negativa general y particular de los hechos invocados en demanda.-

Expone que en forma conjunta distintas personas, humanas y jurídicas, contribuyentes de la tasa por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal, interpusieron demanda contra el municipio.-

Efectúa una aclaración sobre ciertos datos de los predios rurales involucrados, considerando que existen algunos errores u oscuridad de datos.-

Indica que:

-- José Pedro Cornejo, DNI 17.581.293, actúa como titular de los siguientes bienes inmuebles situados en el área rural del Partido de Daireaux, conforme surge del expte. adm. N° 4022-12543/22 y del juicio de apremio N° 16.057 ante el juzgado de paz letrado de Daireaux, cuyos datos catastrales son:

- i) Circ. 8, par. 534-a, partida inmobiliaria 019-2203-0, partida municipal 70.500, sup. 217,9012 has, matrícula 6825/019;
- ii) Circ. 8, par. 536-a, partida inmobiliaria 019-6226-0, partida municipal 70.501, sup. 284,0019 has, matrícula 6824/019;
- iii) Circ. 8, par. 538-a, partida inmobiliaria 019-6227-9, partida municipal 70.502, sup. 313,1133 has, matrícula 6823/019;
- iv) Circ. 9, par. 570-a, partida inmobiliaria 019-1616-6, partida municipal 108.200, sup. 372,5746 has, matrícula 6823/019;

Aclara que Cornejo actuó en instancia administrativa por su propio derecho e invocando representación de otras personas físicas, y en el proceso de apremio se presentó solo, aunque insinuando la existencia de otros copropietarios o contribuyentes.-

Advierte que según los registros municipales, es condómino de solo un 25% indivisa de cada parcela.-

-- El Matico S.A., CUIT 30-64665519-2, actúa como titular de los siguientes bienes inmuebles situados en el área rural del Partido de Daireaux, conforme surge del expte. adm. N° 4022-12542/22 y del juicio de apremio N° 16.056/23 en trámite ante el juzgado de paz letrado de Daireaux, cuyos datos catastrales son:

- i) Circ. 9, par. 568, partida inmobiliaria 019-0611-5, partida municipal 34.500, sup. 375 has, matrícula 7585/019;
- ii) Circ. 9, par. 569, partida inmobiliaria 019-0614-0, partida municipal 34.501, sup. 375 has, matrícula 7584/019.-

Advierte que el representante legal de esta sociedad comercial es José Pedro Cornejo.-

-- Susana de la Serna, DNI 10.096.941, dice actuar como titular de los siguientes inmuebles situados en el área rural del Partido de Daireaux, conforme surge del expte. adm. N° 4022-12539/22, cuyos datos catastrales son:

- i) Circ. 7, par. 343d, partida inmobiliaria 019-04096-8, partida municipal 4.700, sup. 1.041,1042 has, matrícula 918/019;
- ii) Circ. 7, par. 349a, partida inmobiliaria 019-0092-3, partida municipal, sup. 127,5693 has, matrícula 6258/019;
- iii) Circ. 7, par. 349b, partida inmobiliaria 019-09985-7, partida municipal, sup. 192,3617 has, matrícula 6257/019.-

-- Sociedad Anónima SACFIL, CUIT: 30-52874916-6, actúa como titular de los siguientes bienes inmuebles situados en el área rural del Partido de Daireaux, conforme expte. adm. N° 4022-12536/22, juicio de apremio N° 16.055, en trámite ante el juzgado de paz letrado de Daireaux, cuyos datos catastrales son:

- i) Circ. 06, par. 325c, partida municipal N° 63.300, sup. 335 has, matrícula 8251/019;
- ii) Circ. 06, par. 269f, partida municipal N° 4.900, sup. 117,6794 has, matrícula 2114/019;

iii) Circ. 06, par. 318, partida municipal N° 46.200, sup. 403,8344 has, matrícula 8.007/019;

iv) Circ. 06, par. 322, partida municipal N° 46.201, sup. 405,3721 has, matrícula 8.008/019;

v) Circ. 06, par. 269g, partida municipal N° 129.000, sup. 197,4917 has, matrícula 2215/019;

vi) Circ. 06, par. 316, partida municipal N° 32.000, sup. 3901,2902 has, matrícula 8249/019.-

Expone el esquema administrativo y financiero del municipio.-

Señala que el partido de Daireaux tiene una extensión territorial superior a las 382.000 has de superficie y aproximadamente 18.000 habitantes.-

Manifiesta que la mayoría de las vías de comunicación terrestres entre los distintos establecimientos agropecuarios, parajes y localidades son caminos cuyo mantenimiento se encuentra a cargo del Municipio, por ser parte de la red municipal o por haber recibido la cesión por parte de la Provincia por ley 13.010.-

Expone que para ello, se dispusieron reparticiones con personal especializados, equipos y maquinarias que se encargan de mantener en condiciones de transitabilidad de los caminos, ello con la finalidad de tener accesos a los establecimientos agropecuarios, sacar la producción hasta los centros de acopio, permitir la comercialización de los productos, y en otro orden de cosas, permitir el acceso de docentes y alumnos a los establecimientos educativos situados en el campo.-

Afirma que las ordenanzas cuestionadas, fueron aprobadas y promulgadas por autoridades constituidas conforme la Constitución y las leyes, y gozan de la presunción de legitimidad que les asigna el esquema institucional.-

Indica que el ataque a la ordenanza fiscal luce groseramente extemporáneo, y que tanto las definiciones de hecho imponible, sujetos obligados y demás elementos son de vieja data, reiteradamente convalidados y aceptados incluso por los presentantes.-

Manifiesta que los valores de la OI de los ejercicios 2022 y 2023, no tienen pautas de ajuste, sino sumas fijas determinadas para el presente periodo fiscal, y las diferenciaciones de valores según las productividades de las zonas rurales, o las extensiones de los establecimientos no se cuestionan, ni podrían ocurrir en tanto se ubican en los parámetros aceptados como razonables en torno a diferenciar capacidades económicas de franjas de contribuyentes diferenciadas.-

Señala que los cálculos de recursos y presupuestos de gastos confeccionados anualmente por el Ejecutivo y aprobados por el Concejo Deliberante establecen los montos necesarios para el financiamiento del servicio durante doce meses, que comprende mantenimiento de maquinarias, combustibles, repuestos, personal y demás logística, ello sin perjuicio de la adquisición de maquinarias y los gastos indirectos que ejecutan tanto la administración central, como otras reparticiones vinculadas al área rural.-

Advierte que los actores no invocan encontrarse actualmente en emergencia por algún motivo, ni tener problemas de rentabilidad, solvencia o patrimonio, las que solo alegan en forma difusa y opaca en un solo pasaje, sin ofrecer prueba alguna al respecto.-

Indica que el municipio cuenta con una Secretaría de Servicios Públicos, integrada por la Dirección de Servicios Viales, encargada en particular del mantenimiento y mejoramiento de vías de circulación urbanas y rurales.-

Expone que ese esquema orgánico, sufrió algunas modificaciones durante el año 2024, para adaptarlo a nuevos requerimientos o aspectos accesorios de la administración, pero que no cambian sustancialmente el vigente durante los ejercicios aquí involucrados.-

Indica que las parcelas involucradas en la causa, se sitúan en distintos cuarteles o circunscripciones del partido de Daireaux, aunque con el denominador común de ubicarse al noroeste, en los cuarteles 6, 7, 8 y 9.-

Adjuntan en formato pdf a la contestación de demanda, gráficos, mapas, redes camineras e imágenes que identifican la ubicación de los 15 inmuebles, los cuarteles y también la traza completa de la red vial rural.-

Expone que es una zona de suelos arenosos donde se forman pequeños bañados o lagunas, y que terrenos y caminos se erosionan por los vientos durante los periodos secos, presentando desafíos constantes a la hora de sostener su mantenimiento y transitabilidad.-

Indican que ese sector del partido es recorridos por la RP 65 por el sur, que une las ciudades de Bolívar y Guaminí, la RP 86, que partiendo desde Pehuajó pasa por Daireaux y sigue hacia General Lamadrid y Laprida, y también el camino recientemente pavimentado entre la citada ruta 86, en inmediaciones de Henderson y la localidad de Salazar, el núcleo urbano con mayor población del partido, luego de la ciudad cabecera.-

Indica que existen en esa área caminos troncales y secundarios que pasan linderos a las parcelas descriptas más arriba, y sirven para comunicarlas.-

Afirma que en todos ellos, el Municipio dedica y aplica recursos materiales, humanos y financieros para sostener sus usos, con todo tipo de maquinaria, motoniveladoras, palas cargadoras, camiones volcadores, casillas, remolques, petroleros, y realizan trabajos según planes de tareas fijos, y tareas extraordinarias según las circunstancias.-

Manifiesta que en esos sectores, durante 2022 y 2023, se ejecutaron tareas de rellenados, movimientos de suelos y consolidado mediante adquisición, vuelco y nivelación de estabilizado granítico, como el camino a la estación Andant, uno de los troncales más transitado de la zona.-

Indica que si bien a los fines financieros y contables, el partido se divide en tres zonas, Daireaux, Salazar y Arboledas, en lo atinente a cuestiones operativas y logísticas, se han delineado subsectores, cuyas delimitaciones y cantidad de kilómetros se detallan en la documental adjunta denominado “GRA – Subsectores Viales”.-

Afirma que la red caminera rural es extensa y se han distinguido en la misma tres categorías, en razón a la cantidad de usuarios, a su ubicación, a su utilidad de interconexión con otros caminos o rutas o por el entorno.-

Expone los aspectos administrativos, financieros y contables del Municipio en general y del servicio vial en particular.-

Expone los resultados financieros del Ejercicio 2022 y 2023.-

Expone que desde el punto de vista de la normativa reglamentaria vigente, los recursos provenientes de jurisdicción provincial según ley 13.010 reciben el carácter de afectados a su específica finalidad, mientras que los de jurisdicción local son de libre disponibilidad, sin perjuicio de los criterios de proporcionalidad y razonabilidad en su aplicación, advirtiendo que ese carácter de disponible le otorga a la administración municipal facultades para que, con criterios de oportunidad o conveniencia, pueda elevar o disminuir el direccionamiento de recursos según las circunstancias especiales.-

Ejemplifica que es probable que, durante un ejercicio signado por precipitaciones pluviales por encima de los promedios históricos, que provocan anegamientos de caminos, las inversiones y gastos en el servicio sean superiores a los recursos colectados en el ejercicio.-

Señala que mantener y mejorar la red de caminos rurales, no se agota en el paso de motoniveladoras, movimientos de suelos, terraplenados, correcciones de erosiones o lagunas, etc, sino que se complementa con la adquisición de equipos, y trabajos extraordinarios o especiales, que enumera.-

Aduce que plantear una perfecta equivalencia en términos precio/servicio, tal como se plantea en la demanda, es totalmente ajeno a lo que se debate en la presente causa, que se agrava cuando se pretende imponer al Municipio la prueba respecto del frente de cada tranquera o acceso al predio rural del caso, como si el camino en ese lugar no integrara el espacio público.-

Afirma que resulta indudable que el gravamen cuestionado encuentra su fundamento en la prestación de un servicio: el de conservación, reparación y mejorado de la red vial, teniendo en consideración el número de hectáreas pertenecientes al contribuyente, es decir, la capacidad contributiva del obligado, criterio que es aceptado por la jurisprudencia actual.-

Expone que no puede predicarse su ilegitimidad en razón de que el monto a pagar no coincida exactamente con el costo del servicio, toda vez que la SCJBA tiene dicho que no existe norma constitucional o legal que obligue a que las tasas exhiban proporcionalidad entre el costo del servicio y el monto del gravamen, cuyas erogaciones generales deben incidir en las prestaciones particulares en una medida cuya determinación es cuestión propia de la política financiera, salvo demostrada irrazonabilidad o patente y abusiva desproporción.-

Rechaza el argumento de la doble imposición, en tanto la SCJBA ha resuelto en reiteradas oportunidades, que la sola razón de medirse en base a la cantidad de tierra propiedad del contribuyente no transforma a la tasa en un impuesto.-

Manifiesta que existe una constante interacción con los administrados en general y con el sector rural en particular, ello debido a la creación de la Mesa Agropecuaria en el distrito de Daireaux, integrada por representante de diversas entidades rurales y comunitarias.-

Expone que se dio una adecuada respuesta en sede administrativa, rechazando los planteos introducidos, con la debida motivación y con dictámenes previos.-

Aduce que también fueron atendidas y desestimadas las revocatorias, y ante los improcedentes recursos jerárquicos interpuestos, se hizo saber el agotamiento de la vía administrativa.-

Hace referencia a las pretensiones articuladas y la vía procesal otorgada de oficio por el juzgado.-

Respecto de la tasa por control de marcas y señales, afirma que la norma atacada perdió vigencia antes de la notificación del traslado de la demanda, ello debido a la posterior sanción de la ordenanza 2.586/24, que modificó o derogó normas del ordenamiento impositivo, dejando sin efecto el párrafo final del artículo 19, que establecía que los contribuyentes no debían registrar deuda con el municipio y tener actualizado el stock de hacienda.-

Por ello, entiende que la cuestión se tornó abstracta, correspondiendo el rechazo de la demanda.-

Sin perjuicio de ello, aduce que en la demanda se confunden la tasa de control de marcas y señales con la tasa de conservación de la red vial, y que la simple lectura de sus disposiciones dejan claro que los hechos imponibles, los sujetos obligados y los servicios prestados por el municipio no tienen contacto con la última tasa referida, lo que torna infundado los cuestionamientos realizados.-

Se exploya sobre la carga de la prueba de la prestación del servicio en cabeza del Estado.-

Afirma que una interpretación estricta, podría estar abriendo la necesidad de acreditar tranquera por tranquera la realización de tareas con periodicidad suficiente como para justificar el cobro de cada tasa devengada sobre cada parcela de terreno.-

Se pronuncia sobre la prueba ofrecida por los actores y advierte que no se acompañó determinada prueba que se dice acompañada.-

Ofrece prueba, plantea el caso federal y peticiona se rechace la demanda con costas.-

11.- El 25.11.24 se tuvo por contestada la demanda por la Municipalidad de Daireaux y se ordenó traslado de la documental acompañada.-

12.- El 16.12.24 la demandada denunció que los coactores Cornejo y El Matico SA cancelaron la deuda por tasas, incluyendo los períodos 2022 y 2023.-

El 17.12.24 se ordenó traslado del hecho nuevo denunciado.-

El mismo día fue contestado el traslado conferido.-

Los actores reconocen haber efectivizado los importes adeudados, sin que ello implique renuncia a los derechos reclamados por el presente proceso.-

13.- El 18.12.24 se abrió al causa a prueba.-

14.- De la prueba ordenada, se produjo la siguiente: i) prestaron declaración testimonial por el sistema Microsoft Teams, Rodolfo A. Boitard, Adrián A. Barbeite y Gustavo Berón --ver audiencia adjuntadas en formato URL a las actas del 25.2.25--; ii) el 9.4.25 el perito contador oficial Pablo Bolognesi presentó la pericia en formato pdf; iii) el 31.5.25, en dos escritos electrónicos, el perito de lista ingeniero civil Martín Puricelli presentó la pericia en formato pdf; iv) El 17.6.25 la demandada solicitó explicaciones al perito ingeniero civil, que fueron contestadas el 24.6.25 --archivo adjunto pdf--; v) el 17.11.25 se requirió como medidas para mejor proveer ciertas precisiones en la pericia contable y la incorporación de la información pública obrante en la página web del municipio referida a la situación económico financiera de los periodos 2022 y 2023 ---cfme., arts. 36, inc. 2, 4, 6 y 459, inc. 2, CPCC; y 46 y 77 CCA--; y vi) el 11.2.26 el perito contador amplió en informe contable atendiendo a las medidas dictadas por el juzgado.-

15.- El 16.7.25 se pusieron los autos para alegar.-

Los actores presentaron el alegato el 4.8.25, y la parte demandada el 13.8.25.-

16.- El 14.8.25 se pusieron los alegatos presentados en "Público", y se hicieron saber a las partes por cinco (5) días a sus efectos.-

Las partes efectuaron manifestaciones el 18.8.25 --actores-- y el 20.8.25 --demandada--.-

El 29.8.25 se pusieron autos para sentencia. El 17.11.25 se suspendieron los autos para sentencia por el dictado de la medida para mejor proveer.-

Firme el auto que reanuda el plazo para sentencia, la causa se encuentra en condiciones del dictado de la sentencia de mérito.-

## **CONSIDERANDO**

### **1.- Potestades tributarias del municipio**

Los arts. 5 y 123 de la CN disponen que las provincias deben asegurar un régimen municipal autónomo, reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. La CP en sus artículos 190 a 197 establece el régimen



municipal, disponiendo en el art. 191 que la Legislatura deslindará atribuciones y responsabilidades confiriendo las facultades necesarias para atender a los intereses y servicios locales.-

Por otro lado y en relación a las facultades financieras, el art. 192, inc. 5, establece que es inherente al régimen municipal votar el presupuesto y los recursos para costearlo. Asimismo el art. 193, inc. 2, establece que todo aumento o creación de impuestos y contribuciones de mejoras, necesita ser sancionado con mayoría absoluta de los miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes.-

La jurisprudencia de la CSJN a partir de la última reforma constitucional y del precedente "Rivademar" --Fallos 312:326-- sostiene que: *"...las prerrogativas de los municipios derivan de las correspondientes a las provincias a las que pertenecen (arts. 5º y 123)...". (Fallos 320:619; ídem. 320:162 "Telefónica de Argentina c/ Municipalidad de General Pico"), y que "el art. 123 de la Constitución Nacional -incorporado por la reforma de 1994- no confiere a los municipios el poder de reglar las materias que le son propias sin sujeción a límite alguno. La cláusula constitucional les reconoce autonomía en los órdenes "institucional, político, administrativo, económico y financiero" e impone a las provincias la obligación de asegurarla, pero deja librado a la reglamentación que éstas realicen la determinación de su "alcance y contenido". Se admite así un marco de autonomía municipal cuyos contornos deben ser delineados por las provincias, con el fin de coordinar el ejercicio de los poderes que éstas conservan (arts. 121, 122, 124 y 125 de la Constitución Nacional) con el mayor grado posible de atribuciones municipales en los ámbitos de actuación mencionados por el art. 123."* --Fallos 325:1249, cfme., 344:2123; 344:2728--.-

Sin perjuicio de ello, *in re* "Carlos Ponce c/ Pcia. de San Luis" --Fallos 328:175-- se sostuvo que *"...toda asunción por parte de la autoridad provincial de atribuciones que han sido asignadas exclusivamente a los titulares de los departamentos ejecutivos municipales --como es convocar a elecciones dentro de ese ámbito--, afecta seriamente la autonomía municipal al introducir una modificación en ella de manera incompatible con el diseño constitucional. Tal intromisión, de ser aceptada, lesionaría la personalidad y las atribuciones del municipio, pues las autoridades constituidas deben respetar el grado de autonomía asignado a los diferentes niveles de gobierno por el constituyente provincial, cuya preservación no admite limitaciones acotadas por el grado o medida en que las autoridades provinciales franqueen el ámbito reservado a la libre disposición comunal; de no procederse del modo indicado, aún por mínima que fuera la afectación de las instituciones, se autorizará un paulatino y peligroso cercenamiento de las atribuciones municipales..."*.-

*In re*, "Esso Petrolera Argentina SRL y otro c/ Municipalidad de Quilmes s/ Acción contencioso administrativa", la CSJN sostuvo *"...el reconocimiento de la autonomía importa, necesariamente, garantizar los medios para la subsistencia de los municipios. En efecto, cuando la Constitución Nacional manda a las provincias a "asegurar el régimen municipal", dispone -naturalmente- el reconocimiento de una realizada preexistente que solo puede garantizarse con el "derecho a los medios"..."*.-

*Dentro del "derecho a los medios" para la subsistencia del municipio, se encuentran los recursos provenientes de la potestad tributaria que titularizan, la cual les permite "...generar sus rentas y recaudar para invertir y controlar sus recursos que, a su vez, podrán ser manejados independientemente de otro poder, complementando así las facultades de administración que le son propias" (Convencional Prieto, Obra de la Convención Nacional Constituyente 1994, T. VI, pág. 5380, citado en Fallos: 337:1263 y 341:939)"* --Fallos 344:2123, cfme., 346:776--.-

En el caso de la provincia de Buenos Aires la LOM, en sus arts. 226, 227 y 228 establece una enunciación amplia y de carácter no taxativo de los distintos recursos tributarios municipales --cfme., SCJBA, "Aguas Argentina c/ Municipalidad de Lomas de Zamora", del 7.3.05, act. I 1992; act., B 63.396 y B 73.248, "Esso Petrolera Argentina SRL", del 22.6.16 y del 13.11.19, respectivamente; B 63.745 "Automóvil Club Argentino", sent. 29.12.20; CCASM, "Kraft Food Argentina SA c/ Municipalidad de Merlo", act. 983/07, del 6.7.07--.-

Sin perjuicio de la doctrina tradicional de la SCJBA --ver act. I 1595 "Tapera Archete SEA c/ Municipalidad de Magdalena", 5.7.96--, en el precedente "Aguas Argentina c/ Municipalidad de Lomas de Zamora", act. I 1992, del 7.3.05 la mayoría de la Corte manifestó: *"Vale recordar que sobre la base de los textos constitucionales arriba citados, esta Corte, en el caso "Copetro" (I. 1983, sent. de 20-III-2002, "La Ley Buenos Aires", 20021249), rescatando un viejo precedente del tribunal, sostuvo que "a diferencia de otros regímenes municipales, el de Buenos Aires no es una mera dependencia o delegación administrativa del poder provincial, pues tiene una jerarquía institucional netamente demarcada por la Constitución, que le ha conferido las facultades necesarias para que pueda atender eficazmente los intereses o servicios locales" (causa B. 42.200, sent. 12XII1957, en "Acuerdos y Sentencias", 1957V519).*

*Como se ha destacado en el mismo caso "Copetro", "los principios apuntados se han fortalecido todavía más con la reforma constitucional federal de 1994, que al consagrar en su art. 123 la cláusula autonómica municipal, imprimen a los poderes comunales un alcance mayor y más definido (v. I. 1983, cit. y doct. causa B. 59.200, res. de 4-VIII-1998) en aras de la eficaz satisfacción de los intereses locales..."*.-

Atendiendo a la normativa y precedentes antes mencionados, los municipios tienen facultades dentro del marco de la normativa constitucional y legal aplicable para imponer distintos tipos de tributos, elegir los objetos impositivos, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de evaluación de los bienes o cosas sometidos a gravamen, siempre que se respeten las limitaciones de origen constitucional, y legal que actúan sobre su potestad tributaria --cfme., CSJN, Fallos 314:1293; 328:175; 333:993--.

Así, los municipios bonaerenses se encuentran facultados para crear y exigir el pago de tasas en razón de los servicios que prestan --cfme., arts. 192, incs. 6, y 7, y 193, inc. 2, de la CP, y 226, inc. 6, y 227, DL 6.769/58--, pero esa potestad reconocida constitucionalmente "...debe respetar los principios de la tributación y de armonización con el régimen impositivo provincial y federal, de manera que la exacción sea resultado de un estricto ajuste al ordenamiento jurídico..." --SCJBA causa I. 68.491, "Striebeck", sent. del 3.12.14--.

## 2.- La existencia de una tasa

Las tasas, al igual que los impuestos y demás contribuciones, se derivan del poder de imperio del Estado. Se diferencian de estos últimos, por el presupuesto de hecho escogido para hacer nacer la obligación tributaria. En el caso de las tasas, se exige que exista una actividad estatal, específica e individualizada que atañe al sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria. Es decir, la tasa es uno de los "tributos vinculados" --cfme., Ataliba Geraldo, "Hipótesis de incidencia tributaria", pág. 129 y ss, 5ta. ed. Maldeiros Editores SA, 1992--, a la prestación de un servicio por parte del Estado.-

La tasa tiene como hecho generador la prestación de un servicio público individualizado al contribuyente, y su recaudación y posterior erogación tiene un destino, solventar el servicio que constituye el presupuesto de la obligación. Por ello, dos son los caracteres esenciales de esta especie de tributo: i) la caracterización del hecho generador, i.e. la prestación de un servicio público individualizado en el contribuyente; y ii) el destino del tributo, relacionado al costo general del servicio, sin realizar una equivalencia estricta y proporcional a los gastos de la oficina que los presta, i.e. se deben contemplar los costos directos e indirectos --ver en cuanto a este punto, CSJN Fallos 234:663; 277:218; 312:1575; 319:2211; SCJBA "Acuerdos y Sentencias", 1957IV542; 1962III094; 1966III18; causas I. 824, "Alincurá", "D.J.B.A.", t. 116, p. 413; I. 825, "La Constancia", "D.J.B.A.", t. 116, p. 457; I. 1139, "Sanatorio Argentino S.A.", sent. 22-XI-1983; I. 1243, "Empresa Hípica Argentina S.A.", sent. 6-IX-1988, I. 1517, "Lactona Sociedad Anónima" 25-VI-1995; act. I 1992 "Aguas Argentinas SA" 7.3.05, entre otras--.

La CSJN sostiene: *"La atribución de los municipios para crear una tasa, entendida como un recurso de naturaleza coactiva, con fuente legal, regido por el Derecho Público, se encuentra sujeta a las siguientes pautas: a) la definición clara y precisa del hecho imponible y la individualización de los servicios o actividades que se ofrecen; b) la organización y puesta a disposición del servicio al contribuyente, pues de lo contrario el cobro carecería de causa importando un agravio al derecho de propiedad (doctrina de Fallos: 312:1575); y c) la adecuada y precisa cuantificación del tributo (base imponible, alícuota, exenciones y deducciones), debiendo para ello la autoridad fiscal ponderar prudencialmente, entre otros parámetros, el costo global del servicio o actividad concernido (Fallos: 234:663) y la capacidad contributiva (Fallos: 343:1688, voto de los jueces Maqueda y Rosatti)"* --Fallos 344:212--.

La prestación efectiva del servicio al contribuyente es uno de los elementos que permiten distinguir la tasa de las otras especies tributarias, particularmente del impuesto --cfme., entre otros, Bielsa R. "Estudios de Derecho Público", t. II, Derecho Fiscal, pág. 347, Depalma 1951; Ahumada G., "Tratado de Finanzas Públicas", v. I, pág. 185, Assandri 1948; Jarach, D., "Finanzas Públicas y Derecho Tributario", pág. 234, Cangallo, 1985; Giuliani Fonrouge, "Derecho Financiero", t. II, pág. 910, Depalma, 1976; García Belsunce, "Temas de Derecho Tributario", pág. 209, Abeledo Perrot, 1982; García Vizcaino, Catalina, "Derecho Tributario", Tomo I, pág. 102; Valdez Costa, Ramón, "Curso de derecho tributario", pág. 153; XV Jornadas del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, Caracas, 1991, conclusión 7, www.iladt.org; Shaw José L., Las tasas y su diferenciación de otros ingresos estatales, en "Tasas Municipales", tomo I, pág. 29 y ss, dirc. Bulit Goñi, lexisnexis, 2007; Schindel A. Conceptos y Especies de Tributos, en "Tratado de Tributación", tomo I, Derecho Tributario, pág. 585, Astrea 2003; Spisso R., en "Derecho Tributario Municipal", coor. Casás J. O., pág. 193, Ad-Hoc, 2001; Naveira de Casanova, G., Las tasas municipales ante la prohibición de confiscación tributaria, en "Tasas Municipales", tomo I, pág. 366 y ss, dirc. Bulit Goñi, lexisnexis, 2007--.

La CSJN en reiterados pronunciamientos sostuvo el principio antes enunciado, i.e., la tasa debe corresponder siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado, como condición indispensable para que dicho tributo sea legítimo. *In re*, "Compañía Química S.A. c/ Municipalidad de Tucumán", dicho Tribunal declaró "...la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, como es que el cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente (Fallos 236:22 y su cita)." --Fallos 312:1575; cfme., Fallos 251:50 y 222; 320:2609, "Ferguson"; 322:3770, "Berkley"; 325:1370, "Hidroeléctrica Tucumán"; 234:663, "Bco. Nación"; 236:22, "De Gregorio"; 251:222, "Mun. San Lorenzo"; 259:413, "Mun. Santa Fe"; 325:1370; 329:792 "Massalín Particulares SA"; 331:1942 "Mexicana de Aviación SA"; 332:1503 "Laboratorios Raffo SA", ver dictamen de la Dr. Laura Monti; 335:1987; 344:2728 "Gasnor SA"; 344:2830 "Loma del Pila SA"; 347:653 "Cantaluppi"; 348:276 "Aeropuertos Argentina 2000"--.

La SCJBA también sostiene dicho principio, aunque en algunos supuestos se aclare que la prestación del servicio puede ser potencial (cfme., act. B. 58.976 "Centro de Martilleros y Corredores Públicos de Almirante Brown", del 7.11.07; B. 56.454 "Pecom Energía SA", del 17.12.03; causa I. 1270, "Blanco", sent. del 18-IV-1989; "Acuerdos y Sentencias", 1989-I-732; I. 1286, "Papelería Juan V. F. Serra S.A.C.I.F.", sent. del 18-VI-1991; "Acuerdos y Sentencias", 1991-II-296; B. 51.937, "Nobleza Picardo", sent. del 28-XI-1995; "Acuerdos y Sentencias", 1995-IV-518). En los últimos precedentes la Corte aclara que la potencialidad de la prestación del servicio está vinculada con la negativa y/o resistencia del sujeto pasivo de la obligación fiscal en recibirlo, situación que no debe confundirse con la "...ilegitimidad de un obrar municipal que se limite a organizar el servicio y exija el pago de la tasa sin llevar adelante la actividad de contralor a su cargo en términos que, bajo estándares de razonabilidad, atienda a la seguridad e higiene de la población." --SCJBA act. 73.508 "Capaccioni" del 14.2.21; B. 63.745 "Automóvil Club Argentino" del 29.12.20; A.76.741 "Y.P.F. S.A. C/ Municipalidad de General Pueyrredon S/ Pretension Anulatoria" 3.12.21--.-

En el precedente "Laboratorios Raffo SA", Fallos 332:1503, la procuradora, Dra. Monti --dictamen al cual remitió la CSJN- sostuvo: *"...resulta prístino que la diferencia entre tasa e impuesto queda indubitadamente determinada por la existencia o no -en sus respectivos presupuestos de hecho- del desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado..."* --cfme., CSJN Fallos "Syngenta Agro SA" del 28.5.13--.-

La CSJN reiterando los conceptos expuestos en "Laboratorios Raffo SA" indicó: *"...la distinción entre especies tributarias no es meramente académica, pues "desempeña un rol esencial en la coordinación de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno, dado que el art. 9º, inc. b, de la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos. En otras palabras, la contraprestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema de distribución de potestades entre las distintas jurisdicciones pues son éstos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional."* --Fallos 344:2728 "Gasnor SA, sent. del 7.10.21--.-

### 3.- Pretensiones interpuestas por los actores

Los actores cuestionan la legitimidad y constitucionalidad de la tasa de conservación y mejoramiento de los caminos rurales, respecto de los siguientes inmuebles:

- i) Pedro José Cornejo de las partidas inmobiliarias: a) N° 019-000616-6, parcela 570 A; b) N° 019-006227-9, parcela 538 A; c) N° 019-006226-0, parcela 536 A; y iv) N° 019-002203-0, parcela 534 A;
- ii) el Matico SA es de las partidas inmobiliarias: a) N° 019-000614-0 parcela 569; y, b) N° 019-000611-5, parcela 568;
- iii) Susana De la Serna de las partidas inmobiliarias: a) N° 019-004096- 8, circ. 7, parc. 343 D; b) N° 019-009985-7, circ. 7, parc. 349 B; y, c) N° 019-000092-3, circ 7, parc 349 A.-
- iv) SACFIL SA de los inmuebles: a) circ. 06, partida municipal N° 0063300, parcela 325 C; b) circ. 06; partida municipal N° 0004900, parc. 269 F; c) circ. 06; partida municipal N° 0046200, parc. 318; d) circ. 06; partida municipal N° 0046201, parc. 322; e) circ. 06; partida municipal N° 0129000, parc. 269 G y f) circ. 06; partida municipal N° 0032000, parc. 316 todas del partido de Daireaux.-

Las causas esenciales por las cuales cuestionan el tributo pueden subsumirse en las siguientes: i) omisión en la prestación efectiva del servicio; y ii) tergiversación del concepto de la tasa, al cual le asignan el carácter de un impuesto, al no existir una debida proporción entre la obligación fiscal y el costo general del servicio --i.e., denuncian que se destina la recaudado por la tasa a rentas generales y no a atender los costos atribuibles al servicio--.-

Adicionalmente, cuestionan la legitimidad y constitucionalidad de la tasa por control de marcas y señales, conocida como tasa de "guías" y el requisito previsto en el art. 19 de la OI 2569/2024, de no tener deuda municipal y actualizado el stock de hacienda, para poder obtener la guía para el traslado de semovientes.-

4.- Los jueces no se encuentran obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean "conducentes" para la correcta composición del litigio --cfme., CSJN, Fallos 272:225; 274:486; 276; y 287:230 entre otros--.-

### 5.- Tasa por conservación de caminos rurales

#### 5.1 Marco normativo

El Título XIV de la OF 618 sancionada el 28.11.1997 por el Honorable Concejo Deliberante de Daireaux, vigente para los períodos 2022, 2023 y 2024 establece la tasa cuestionada.-

Artículo 157°: Por la prestación de servicios de Conservación, Reparación y Mejoramiento de calles y caminos rurales municipales, se abonarán los importes que al efecto establezca la Ordenanza Impositiva Anual.

Artículo 158°: La obligación de pago, estará a cargo de:

- a) Los titulares del dominio de los inmuebles, con exclusión de los nudos propietarios.
- b) Los usufructuarios.
- c) Los poseedores a título de dueños.

Artículo 159°: El pago de la tasa municipal, prevista en el presente Título, se efectivizará en la forma y plazos que se fijen en la Ordenanza Impositiva, independientemente de los eventuales anticipos, dispuestos por el Departamento Ejecutivo, de acuerdo con Artículos 39° y 40° de esta Ordenanza Fiscal.

Artículo 160°: La base imponible, será la constituida por la superficie de los inmuebles, calculados por hectáreas que surgen de los títulos de propiedad, planos de mensuras aprobadas y/o fichas catastrales.

Artículo 161°: A los efectos del pago de la presente tasa, están comprendidos en ella, todos los inmuebles del Partido.

Artículo 162°: Aquellas explotaciones cuyas parcelas se encuentren unidas, que tengan laguna, sin explotación comercial en forma permanente, de un 20% o más, no pagarán esta tasa por dichas hectáreas, previa declaración jurada, con reserva de verificación del Municipio."-

La OI 2.458/22 establece en el capítulo XVI

ARTICULO 21°: Fijase los montos de la presente Tasa

ZONAS	Valor base por Ha. (hasta 400 Has.)	Valor por Ha. que supere la Base (sobre 400 ha)
ZONA I Cuarteles III, IV y XII	\$ 547,00	\$ 657,00
ZONA II Cuarteles V, VI, VII, VIII, IX, X y XI	\$ 921,00	\$ 1.105,00

Esta tasa no incluye la realización de canalizaciones no compra y colocación de alcantarillas en propiedades privadas, salvo que en caso de interés público sea necesario.

Estos montos se abonarán por hectárea y por año. Los titulares de dominio que posean en conjunto sumado las parcelas a su nombre una superficie total superior a 400 hectáreas abonarán el valor establecido en la segunda columna por cada hectárea en la que se supere dicha superficie Base.-

Se establece un importe de \$ 7.- (pesos: siete) por hectárea y por año denominada "Participación Incendios Forestales Rurales", utilizada para el combate y extinción de incendios en establecimiento rurales y/o caminos rurales, que se aplicará en forma complementaria con la tasa Red Vial. La presente se abonará junto con la primera cuota de la tasa vial.

Se autoriza al D.E. a establecer en cada cuota que se abone en termino, un descuento de hasta un 10% (diez por ciento) en el pago de las mismas a aquellos contribuyentes que no registren deuda de la presente tasa al momento del pago. Por pago anual efectivizado antes del 31 de Enero de 2022, la tasa tendrá un descuento del 12,50% (doce con cincuenta por ciento).

Los productores que realicen el "Plan de Mejoramiento de Suelos", con certificado anual que asegure la buena práctica de uso del suelo otorgado por la Secretaría de Desarrollo Municipal, tendrán un 5% (cinco por ciento) adicional de descuento, siempre que se encuentren al día con el pago de la tasa."

La OI 2525/22, vigente para el ejercicio fiscal 2.023. establece en el capítulo XVI:

ARTICULO 21°: Fijase los montos de la presente Tasa

ZONAS	Valor base por Ha. (hasta 400 Has.)		Valor por Ha. que supere la Base (sobre 400 ha)

ZONA I Cuarteles III, IV \$ 903,00 \$ 1.084,00  
y XII

ZONA II Cuarteles V, VI, \$ 1.520,00 \$ 1.823,00  
VII, VIII, IX, X y XI

*Esta tasa no incluye la realización de canalizaciones no compra y colocación de alcantarillas en propiedades privadas, salvo que en caso de interés público sea necesario.*

*Estos montos se abonarán por hectárea y por año. Los titulares de dominio que posean en conjunto sumado las parcelas a su nombre una superficie total superior a 400 hectáreas abonarán el valor establecido en la segunda columna por cada hectárea en la que se supere dicha superficie Base.-*

*Se establece un importe de \$ 15.- (pesos: quince) por hectárea y por año denominada "Participación Incendios Forestales Rurales", utilizada para el combate y extinción de incendios en establecimiento rurales y/o caminos rurales, que se aplicará en forma complementaria con la tasa Red Vial. La presente se abonará junto con la primera cuota de la tasa vial.*

*Se autoriza al D.E. a establecer en cada cuota que se abone en termino, un descuento de hasta un 10% (diez por ciento) en el pago de las mismas a aquellos contribuyentes que no registren deuda de la presente tasa al momento del pago. Por pago anual efectivizado antes del 31 de Enero de 2023, la tasa tendrá un descuento del 12,50% (doce con cincuenta por ciento).*

*Los productores que realicen el "Plan de Mejoramiento de Suelos", con certificado anual que asegure la buena práctica de uso del suelo otorgado por la Secretaría de Desarrollo Municipal, tendrán un 5% (cinco por ciento) adicional de descuento, siempre que se encuentren al día con el pago de la tasa.".-*

La OI 2525/22, vigente para el ejercicio fiscal 2.023. establece en el capítulo XVI:

ARTICULO 21°: Fijase los montos de la presente Tasa

ZONAS	Valor base por Ha. (hasta 400 Has.)	Valor por Ha. que supere la Base (sobre 400 ha)
ZONA I Cuarteles III, IV \$ 903,00 y XII	\$ 903,00	\$ 1.084,00
ZONA II Cuarteles V, VI, \$ 1.520,00 VII, VIII, IX, X y XI	\$ 1.520,00	\$ 1.823,00

*Esta tasa no incluye la realización de canalizaciones no compra y colocación de alcantarillas en propiedades privadas, salvo que en caso de interés público sea necesario.*

*Estos montos se abonarán por hectárea y por año. Los titulares de dominio que posean en conjunto sumado las parcelas a su nombre una superficie total superior a 400 hectáreas abonarán el valor establecido en la segunda columna por cada hectárea en la que se supere dicha superficie Base.-*

*Se establece un importe de \$ 15.- (pesos: quince) por hectárea y por año denominada "Participación Incendios Forestales Rurales", utilizada para el combate y extinción de incendios en establecimiento rurales y/o caminos rurales, que se aplicará en forma complementaria con la tasa Red Vial. La presente se abonará junto con la primera cuota de la tasa vial.*

*Se autoriza al D.E. a establecer en cada cuota que se abone en termino, un descuento de hasta un 10% (diez por ciento) en el pago de las mismas a aquellos contribuyentes que no registren deuda de la presente tasa al momento del pago. Por pago anual efectivizado antes del 31 de Enero de 2023, la tasa tendrá un descuento del 12,50% (doce con cincuenta por ciento).*

*Los productores que realicen el "Plan de Mejoramiento de Suelos", con certificado anual que asegure la buena práctica de uso del suelo otorgado por la Secretaría de Desarrollo Municipal, tendrán un 5% (cinco por ciento) adicional de descuento, siempre que se encuentren al día con el pago de la tasa.".-*

## 5.2 Legitimidad y constitucionalidad de la tasa por conservación y mantenimiento de caminos rurales

Surge acreditado en autos que Pedro José Cornejo --al menos parcialmente--, El Matico SA, Susana De la Serna y SACFIL SA son sujeto pasivo de la tasa por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial, respecto de los inmuebles indicados en el considerando 3, como también que efectuaron pagos por la tasa mencionada durante los períodos cuestionados (cfme. dda, contestación de demanda y

denuncia de hecho nuevo del 16.12.24; exptes. adm. acompañados por la demandada nros 4022-12542/2022; 4022-12543/2022, 4022-12539/2022 y 4022-121536/2022).-

-- Hipótesis de incidencia / Hecho y base imponible

El principio de legalidad en materia tributaria implica que el hecho imponible --en el caso de una tasa la prestación del servicio vinculada al pago del tributo--, este definido en la ley que lo establece --cfme., arts. 4, 17, 52, 75, inc. 2, 76, 99 inc. 3, CN; 45 CP; cfme., CSJN Fallos 155:290; 155:293, 182:412, 198:258, 211:930, 218:231; 184:542; 185:36; 186:521; 206:21; 214:269; 251:7--". *"...El principio de reserva de la ley tributaria, de rango constitucional y propio del Estado de derecho, sólo admite que una ley formal tipifique el hecho que se considera imponible y que constituirá la posterior causa de la obligación tributaria..."* --CSJN, Fallos 294:152--.

En el caso de autos, el hecho imponible de la tasa lo configura la prestación de los servicios de conservación, reparación y mejoramiento de la red vial rural que permite el debido tránsito de los caminos rurales, el acceso a los establecimientos agropecuarios y el movimiento de la producción originada en la actividad agrícola ganadera.-

Las ordenanzas municipales cuestionadas describen la hipótesis de incidencia y la vinculación directa entre el servicio o actividad determinada del Estado con el pago del tributo.-

El gravamen por conservación de la red vial es un recurso tributario municipal con base en la Constitución provincial --art. 192, inc. 4-- previsto en la LOM --arts. 226, incs. 17; conc. 25, 27 inc. 1º, 227 y 228--.-

El legislador municipal estableció que la tasa se liquide en proporción sobre la cantidad de hectáreas de los propietarios de los fundos rurales lindantes al camino sobre el cual recae la prestación del servicio.

Adviértase que el legislador en el marco de su competencia exclusiva en materia tributaria, puede considerar en la selección de la base imponible y categorización de los contribuyentes, no solo el costo de los servicios que se ponen a su disposición, sino también, su capacidad contributiva --CSJN Fallos 344:2123; 343:1688, voto de los jueces Maqueda y Rosatti, 234:663; 277:218 y 287:184--.-

Así, para fijar la cuantía de la tasa retributiva de los servicios públicos, resulta equitativo y aceptable que se tome en cuenta no solo el costo efectivo de ellos con relación a cada contribuyente, sino también su capacidad contributiva --cfme., CSJN Fallos 192:139 "Vignolo de Casullo"--, ello, a fin de cobrar a los de menor capacidad contributiva una gabela menor que la requerida a los de mayor capacidad, equilibrando de ese modo el costo total del servicio público --cfme., CSJN, Fallos 321:1888 "Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de"; 277:218 "Sniafa S.A."---

Como se expuso *supra*, el gravamen por reparación y conservación de la red vial municipal es un recurso tributario municipal que se encuentra previsto en la LOM --arts. 226 incs. 6 y 31; conc. 25, 27 inc. 2º, 227 y 228; SCJBA causas I. 1243 ; B. 50.259, "Consortio de Propietarios Mayling S.A.", sent. 28.3.95--.-

La circunstancia que la base imponible establecida sea la superficie de los inmuebles, y/o que se establezca un valor determinado a abonar por cada hectárea no transforma a la tasa en un impuesto, desde que ambos tributos se diferencian en cuanto al presupuesto de hecho adoptado por la ley para exigirlo --cfme. SCJBA causas I. 1.270, "Casa Blanco", del 18.4.89; I. 1.288 "Isaura S.A", de 23.4.90; I. 1.286, "Papelería Juan", del 18.6.91; B. 51.937 "Nobleza Piccardo" del 28.11.95; I. 1.541 "Bernal de Palacio" del 29.12.98; I. 1.588, "Amacri S.A.", del 7.3.01--.-

*"...Resulta indudable que el gravamen que en autos se cuestiona es una "tasa", pues halla su fundamento en la prestación de un servicio: el de conservación, reparación y mejorado de la red vial, teniendo en consideración la suma de superficie de los inmuebles rurales pertenecientes a un mismo contribuyente, es decir la capacidad contributiva del obligado, criterio que es aceptado por la doctrina, legislación y jurisprudencia modernas (cfr. Causa I. 1541 cit y sus referencias doctrinarias)..."* --SCJBA causa I. 1.588, "Amacri SA", del 7.3.01--.-

La legitimidad de establecer la base imponible de la tasa teniendo en consideración la superficie de los inmuebles y/o la fijación del importe a abonar por cada hectárea es una cuestión de política fiscal cuya decisión compete a los poderes legislativo de cada municipio --cfme., SCJBA act. I. 1.183 "Nida SA" del 31.5.1988; B. 63.745 "Automóvil Club Argentino" del 29.12.20--, en la medida que dicha cuantificación respete los principios, limitaciones y derechos reconocidos constitucionalmente --cfme. CSJN Fallos 344:2123, ver nuestro precedente en un caso similar en expte. 11136 "Ramos Mejía, Celia Marta c/ Municipalidad de Pehuajó" del 7.10.19, confirmado" por CCASM sent. del 12.5.20--.-

Al ser ello así no se configuran elementos normativos que permitan invalidar el tributo en abstracto por la forma en la cual fue previsto por el legislador. Ello sin perjuicio de lo expuesto en los puntos subsiguientes *infra*.-

### 5.3 Efectiva prestación del servicio

La desnaturalización jurídica del concepto "tasa" en cuanto a la vinculación con una actividad estatal puede darse principalmente por dos supuestos: i) por defecto, i.e, ante la inexistencia de la organización y/o prestación del servicio --ya sea este efectivo o potencial con el alcance que la SCJBA le otorga a este concepto ver act. 63.745 "Automóvil Club Argentino" del 29.12.20; act. 73.508, "Capaccioni", del 24.2.21; act. 76.741 "Y.P.F. S.A." del 5.3.21--; o ii) por exceso, cuando la tasa está llamada a cubrir servicios generales, i.e., cuando la vinculación del tributo a la actividad estatal, no se concreta en la efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado --ver CSJN 332:1503; 344:2728; 347:653--.-

La demostración de la efectiva prestación del servicio --frente a la negativa del contribuyente en su ejecución-- se encuentra a cargo del prestador del servicio debido a que se encuentra en mejores condiciones de acreditarlo --cfme., CSJN Fallos 275:407 "Llobet de Delfino"; 319:2211 "Empresa de Transportes de Pasajeros Navarro Hnos. S.R.L."; M. 715 XLI, "Municipalidad de Concordia c/ Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. s/ Ejecución fiscal", sent. del 26.3.09 que adhirió al dictamen de la Procuradora del 21.2.07; R. 1055, L.XLIII, "Renault Argentina S.A. (TF 19.292-A) c/ DGA", del 16.2.10, ver el auto del 3.5.24 en esta causa--.-

*"...en efecto, la Administración está, indudablemente, en mejores condiciones para demostrar -si así hubiere ocurrido la prestación del servicio de marras, mediante todo tipo de pruebas (v.gr. los informes y actas de las inspecciones realizadas; con testimonio de los inspectores actuantes; etc.)..."* --CSJN Fallos 335:1987 "Quilpe S.A.", del dictamen de la Procuradora del 23.11.11 al que adhirió la Corte--.-

El concepto de potencialidad en la prestación del servicio vinculado al cobro de la tasa fue delimitado por la actual jurisprudencia de la SCJBA --adecuando sus precedentes a la jurisprudencia de la CSJN--. Así la potencialidad está vinculada con la negativa y/o resistencia del sujeto pasivo de la obligación fiscal en recibirlo, situación que no debe confundirse con la ilegitimidad de un obrar municipal que se limite a organizar el servicio y exigir el pago de la tasa sin llevar adelante la actividad a su cargo bajo estándares de razonabilidad --cfme., SCJBA act. 73.508 "Capaccioni" del 14.2.21; B. 63.745 "Automóvil Club Argentino" del 29.12.20--.-

En el caso de autos surge acreditado que el municipio tiene organizada una estructura destinada a brindar el servicio de mantenimiento de la red vial --ver pericia producida por el ingeniero civil, decl. testimonial de Boitard, Secretario de Servicios Públicos del municipio, Barbeite, Director Vial y Berón, empleado municipal, audiencias del 25.2.25; arts. 456, 474 y cc del CPCC--.-

Ello no legitima *per se* el cobro de la tasa. A tal fin debe acreditarse una efectiva prestación del servicio al contribuyente, bajo criterios de razonabilidad, es decir, atento el objeto de la tasa, el servicio efectivamente brindado debe garantizar la circulación por los caminos rurales, garantizando la existencia de, al menos, un camino en buenas condiciones para el acceso al inmueble que origina el pago de la tasa, y permita al contribuyente acceder al inmueble y retirar en condiciones razonables el fruto de la producción agropecuaria --cereales, leche, ganado--.-

Asimismo deben contemplarse las situaciones regulares y/o extraordinarias de carácter climático que pueden influir en la prestación normal del servicio --inundaciones, sequías, etc.--, a fin de establecer la transitabilidad del camino y la magnitud del servicio municipal.-

Es decir, la naturaleza del tributo requiere que el municipio brinde en forma particularizada a cada sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, un servicio que permita, en forma habitual, y contemplando los distintos fenómenos climáticos, el normal tránsito por los caminos para el acceso a su inmueble, como condición indispensable para que dicho tributo sea legítimo.-

La periodicidad en la prestación efectiva de los servicios vinculados al cobro de la tasa está relacionada con el estado del camino y las obras necesarias para hacerlo transitable, es decir, demandará mayor o menor mantenimiento y/u obras --e.g. alcantarillas, alteos, cunetas-- dependiendo de varios factores --e.g. tipos de suelo, forma de construcción, frecuencia de uso, factores climáticos, etc.--.-

Así, en el caso de autos, la prestación del servicio vinculado al pago de la tasa debió realizarse siempre que el camino presentare inconvenientes de intransitabilidad, a efectos de garantizar la normal circulación y acceso a los predios involucrados. Adviértase que en la causa no se acreditaron, por los períodos involucrados, factores climáticos extremos --que pudieran configurarse en un caso fortuito o de fuerza mayor--, que incidieran en la prestación normal del servicio municipal.-

Conforme surge de las declaraciones testimoniales, pericias y hechos alegados por las partes, a los efectos de la prestación del servicio de mantenimiento de los caminos rurales, el partido de Daireaux se divide en cuatro sectores, en los cuales, según su importancia, existen caminos primarios, secundarios y terciarios.-

El perito ingeniero civil, recorrió, aproximadamente 380 km de caminos rurales --caminos primarios y secundarios--, de los sectores 1 y 2 --donde se encuentran ubicados los inmuebles de los actores--, y revisó el parque automotor destinado a la prestación del servicio --adjuntó

fotografías de las maquinarias y herramientas de trabajo-- De la pericia surgen los siguientes datos relevantes:

i) El municipio divide a efectos de la prestación del servicio al territorio en cuatro sectores. a) el sector 1, tiene 257 km de caminos primarios, 90,9 km de caminos secundarios y 32 km de caminos terciarios; b) el sector 2, tiene 118,6 km de caminos primarios, 78,5 km de caminos secundarios y 11 km de caminos terciarios; c) el sector 3, tiene 121 km de caminos primarios, 66,8 km de caminos secundarios y 18,7 km de caminos terciarios; d) el sector 4, tiene 144,4 km de caminos primarios, 114,2 km de caminos secundarios y 37,9 km de caminos terciarios.-

El total de kilómetros de caminos rurales del partido es de 1.091 km --de las constancias de autos no surge cuáles corresponden a caminos provinciales, cuyo mantenimiento se encuentra a cargo del municipio, ver ley 13.010, y cuáles son estrictamente de la comuna--.-

ii) Sostiene que atento la extensión de los caminos y la necesaria frecuencia de mantenimiento --ocho veces al año para caminos principales, cinco para secundarios y dos para terciarios-- según el "Manual de Caminos Rurales de la Asociación Argentina de Carreteras", se deben mantener 7.079 km lineales.-

iii) Indica que según los recursos existentes el 71 % de la red de caminos rurales debería estar en estado "muy bueno" y que el municipio cuenta con recursos suficientes para mantener la red vial en excelente condiciones. Sostiene que dicho recursos no se estarían aplicando.-

iv) Advierte que la mitad del parque automotor excede su vida útil.-

iii) Observa constante impacto de montículos de tierra y vegetación en la parte baja del vehículo, dando pauta de un ahuellamiento considerable, como también en la mayoría de los casos la existencia de un bombeo negativo --implica la acumulación de agua en el centro del camino--, y falta de cunetas en al menos uno de los lados en algunos caminos. Sostiene que esas cuestiones se observaron de forma prácticamente constante en todo el recorrido.-

iv) En razón de los parámetros de irregularidad superficial, deformaciones localizadas, deformaciones longitudinales, corrugaciones u ondulaciones, pérdida de perfil transversal, pérdida de materiales y drenaje, clasifica el estado de los caminos en: muy bueno, bueno, regular o malo.-

Aclara que: a) caminos "muy bueno" y "bueno", corresponden a caminos transitables; b) camino "regular" corresponde a camino difícilmente transitable; y c) camino "malo", refiere a un camino intransitable.-

Indica que el 41% de la red se encontraría en estado aceptable para circular, el 59% no contaría con condiciones adecuadas, y solo el 4% de la red se encontraría en estado "muy bueno".-

Advierte que atendiendo a los recursos disponibles, deberían estar en estado "muy bueno" el 70 % de la red vial del partido.-

Adicionalmente, señala que los caminos en estado "muy bueno" se arreglaron en días inmediatamente previos, o durante la ejecución de la labor pericial. Indica dudas en algunos caminos sobre la durabilidad de los arreglos realizados debido a una inadecuada compactación.-

Acompañó fotografías de los caminos peritados.-

v) Expone que observa la existencia de alteos en concordancia con bajos y cañadas, lugares que no los tienen y los requieren, pocas alcantarillas o incluso inexistentes en el sector más alejado del partido, estructuras nuevas, de antigua data, algunas en buenas condiciones y otras totalmente taponadas de suelo. Señala que las alcantarillas están totalmente subdimensionadas, pues corresponde a las mínimas secciones que suelen verse en estos casos.-

vi) Sostiene que el presupuesto que tiene el Municipio es adecuado para la cantidad de maquinaria disponible y el nivel de inversión necesarios para mantener la red vial rural en óptimas condiciones, y que por ello, le llama la atención que disponiendo de medios y recursos para tener un 70% de la red vial en condiciones "muy buena", solo el 4% este en esa condición.-

vii) Realiza una estimación de costos e indica que solo el 17% del presupuesto tuvo contraprestación en servicios efectivamente prestados para el año 2023 y 10% en el 2022.-

viii) Respecto de cada una de las parcelas perteneciente a los actores, sostiene: a) las parcelas 538a, 536a, 534a, 570a, 569 y 568 cuentan con salida razonable a la denominada "ruta del cereal", y su acceso no es razonable a la RP65 por encontrarse sectores del camino rural en estado regular; b) las parcelas 325C, 316, 269g, 169f, 318 y 322 cuentan con salida razonable a la RP65, no así a la denominada "ruta del cereal"; c) las parcelas 349a, 349b y 343 no tiene salida razonable por requerir el tránsito por los perfiles 151, 108, 112, 113 o 114, los cuales presentan estado regular o malo.-



ix) Indica que las conclusiones del dictamen pueden extrapolarse directamente a los períodos anuales anteriores objeto del litigio, ello debido a que "...la existencia de un litigio previo a la inspección realizada es de esperar que el municipio:

-- ha mantenido el laboreo en las mismas condiciones que las existentes previas al conflicto

-- ha mejorado la gestión del parque vial a efectos de mejorar las condiciones viales previo a la labor pericial.

Carece de lógica esperar que luego de iniciado el conflicto, el Municipio haya empeorado la calidad del servicio. Por ello, este perito interpreta que las conclusiones del año 2025 son lo suficientemente similares a aquellas que pudo existir en períodos anteriores. Más cuando el estado de la red es malo y muestra signos de poca intervención..."-.

De la documentación pública incorporada a la causa el 17.11.25, correspondiente a la situación económico financiera del municipio por los ejercicios 2022 y 2023 --<https://daireaux.gob.ar/wp-content/uploads/2023/03/SITUACION-ECONOMICA-FINANCIERA-AL-31-12-2022.pdf> <https://daireaux.gob.ar/wp-content/uploads/2024/05/SITUACION-ECONOMICA-FINANCIERA-2023-2.pdf>-- surge que durante el año 2022 se programó el mantenimiento de 1.200 km de caminos rurales y se ejecutaron 1.195 km y durante el año 2023 se programó el mantenimiento de 1.300 km y se ejecutaron 992 km.-

Tanto la programación como la ejecución de la cantidad de km antes señalada dista considerablemente de la indicada por el perito --7.079 km--, para la obtención de un servicio de conservación, reparación y mejorado de la red vial eficiente.-

Adviértase a cualquier efecto que el art. 157 de la OF 618/97 vigente para los períodos 2022, 2023 y 2024 establece el alcance de la prestación debida por el municipio atribuible al pago de la tasa. i.e. la conservación, reparación y mejorado de calles y caminos rurales municipales. Asimismo la ley 13.010 dispone que los fondos recibidos por el municipio originados en las transferencias correspondientes a lo recaudado por el impuesto inmobiliario rural tienen por destino el mantenimiento y la realización de obras de la red vial provincial de tierra existentes en el municipio --cfme., arts. 2, 3 y 4--.-

El informe del perito es dirimente en relación a la deficiente prestación del servicio de conservación, reparación y mejorado de calles y caminos rurales por parte del municipio durante los periodos analizados. Así en forma genérica el perito indica que solo el 41% de los caminos presenta condiciones de transitabilidad aceptable, indica fallas estructurales de construcción o mantenimiento --ahuellamiento considerable, existencia de un bombeo negativo, falta de cunetas, falta de alteos, escasas y subdimensionadas alcantarillas o incluso inexistentes en el sector más alejado del partido, inadecuada compactación, etc.--, y deficiente cantidad de km efectivamente mantenidos --se reitera, el perito estima necesario, en atención a la extensión de los caminos rurales, la realización de 7.079 km de mantenimiento anuales--. Situación que se agrava al sostener que los recursos y medios son suficientes para la realización de un servicio aceptable.-

Sin perjuicio de ello, a cualquier efecto, debe tenerse presente el objeto de la pretensión de los actores. Así en la causa no se requiere que se condene al municipio a establecer parámetros eficientes en la prestación de un servicio público de conservación, reparación y mejorado de calles y caminos rurales.-

El objeto de la presente causa finca en establecer la legitimidad y validez constitucional del tributo impugnado --períodos 2022, 2023 y 2024-- en forma particular para los actores --contribuyentes--, i.e., no nos encontramos frente a una acción de clase en la cual se invoque la representación de un grupo de personas.-

Al ser ello así y toda vez que el requisito de validez de la tasa es la efectiva prestación del servicio en forma individualizada a cada contribuyente --ver *supra*--, debe analizarse si conforme las constancias de autos existen elementos que acrediten la prestación del servicio señalado a los actores con un grado de magnitud que sustente la legitimidad del tributo.-

Así, corresponde analizar conforme a las constancias de autos el estado de los caminos lindante a cada una de las parcelas de propiedad de los actores, y si estos tuvieron, al menos, un vía razonable de acceso a sus predios.-

Las parcelas involucradas en autos se encuentran en los sectores 1 y 2, conforme el plano catastral adjuntado a la contestación de demanda --caminos peritados por el experto--.-

Tal como se señaló *supra*, preguntado el perito si los caminos linderos de las parcelas involucradas sirven razonablemente para darle salida hacia las rutas provinciales asfaltadas más próximas --y, en su caso, poder sacar la producción agropecuaria--, el experto dictaminó:

i) las parcelas 538a, 536a, 534a, 570a, 569 y 568 cuentan con salida razonable a la denominada "ruta del cereal", y su acceso no es razonable a la RP65 por encontrarse sectores del camino rural en estado regular; ii) las parcelas 325C, 316, 269g, 169f, 318 y 322 cuentan con salida razonable a la RP65, no así a la denominada "ruta del cereal"; iii) las parcelas 349a, 349b y 343 no tiene salida razonable por requerir el tránsito por los perfiles 151, 108, 112, 113 o 114, los cuales presentan estado regular o malo --cfme pericia presentada el 31.5.25; art. 474, CPCC--.-

Asimismo sostuvo que las conclusiones pueden extenderse a los períodos anteriores a la fecha de la realización de la pericia --2025--.-

Por otro lado, el municipio, pese al proveído del 3.5.24 --traslado de demanda--, en el cual se hizo saber que debía ofrecer prueba sobre la efectiva prestación del servicio realizados en los caminos que vinculan a los predios de los actores --cfme., CSJN Fallos 275:407 "Llobet de Delfino"; 319:2211 "Empresa de Transportes de Pasajeros Navarro Hnos. S.R.L."; M. 715 XLI, "Municipalidad de Concordia c/ Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. s/ Ejecución fiscal", sent. del 26.3.09 que adhirió al dictamen de la Procuradora del 21.2.07; R.1055, L.XLIII, "Renault Argentina S.A. (TF 19.292-A) c/ DGA", del 16.2.10; 335:1987 "Quilpe S.A.", del dictamen de la Procuradora del 23.11.11 al que adhirió la Corte; art. 1.735, CCyC--, omitió realizar pruebas que acrediten las circunstancias de tiempo y lugar referidas al servicio de conservación, reparación y mejorado de calles y caminos rurales vinculados a los inmuebles señalados.-

Así, en el presente caso, como surge de la pericia mencionada *supra*, las parcelas 538a, 536a, 534a, 570a, 569 y 568 --ruta del cereal--, y las parcelas 325C, 316, 269g, 169f, 318 y 322 --RP65--, contaron con, al menos, una vía razonable de salida y/o acceso a los inmuebles que demuestra que el Municipio brindó parcialmente --ver que las otras vías de acceso no son razonables-- el servicio de mantenimiento del camino, teniendo presente que el experto expuso que "salida razonables" es equiparable a camino en estado "muy bueno" o "bueno".-

Por ello, la concreta prestación del servicio --aun cuando pueda considerarse parcial-- valida constitucionalmente el cobro de la tasa.-

No ocurre lo mismo con las parcelas 349a, 349b y 343 para las cuales no se acreditó la existencia de una salida y/o acceso razonable. El perito informa que los caminos que se vinculan a tales inmuebles presentan un estado regular o malo, i.e. son de dificultosa transitabilidad o intransitables, ello debido a la ausencia de mantenimiento.-

Para que el cobro de la tasa sea constitucionalmente válida, se requiere acreditar que la prestación del servicio reúne, al menos, mínimos requisitos de eficacia, no que el servicio sea prestado en términos de excelencia o bajo estándares de máxima eficiencia.-

Que el perito haya dictaminado que el 59 % de los caminos auditados no se encuentran en condiciones adecuadas para circular y/o que solamente el 4% de los caminos se encuentra en estado "muy bueno", podrá dar lugar a otro tipo de acciones --pretensiones vinculadas a lograr una prestación eficiente del servicio--, pero no invalida *per se* constitucionalmente el cobro de la tasa correspondiente a los actores.-

Al ser ello así respecto de las parcelas 349a, 349b y 343 --titularidad de Susana de la Serna--, atento la falta de prueba sobre la existencia de caminos razonablemente transitables en los períodos cuestionados --2022, 2023 y 2024--, corresponde hacer lugar a la demanda y declarar la ilegitimidad de la tasa por la falta de prestación efectiva del servicio vinculado.-

Por ello, atento la pretensión por la cual tramitó el presente juicio --declarativa de certeza--, corresponde declarar la ilegalidad de la tasa respecto de las parcelas 349a, 349b y 343 --titularidad de Susana de la Serna-- por no haberse configurado el hecho imponible que habilita el cobro de la tasa --i.e., la efectiva prestación de un servicio individualizado al contribuyente--, conforme lo expuesto precedentemente. Así la actora podrá, en su caso, repetir las sumas indebidamente abonadas por tal concepto.-

A cualquier evento y en el marco de la acción iniciada --declarativa de certeza sobre la inconstitucionalidad de las ordenanzas cuestionadas-- se aclara que no debe confundirse la validez constitucional de las ordenanzas --situación analizada en los puntos *supra*--, es decir la adecuación de la norma a los preceptos y principios constitucionales, con la ilegalidad y por ende inconstitucionalidad de la pretensión fiscal y de los pagos efectuados por un tributo por el cual no se configuró el hecho imponible previsto en la hipótesis de incidencia contemplada en la norma. Así la falta de concreción del hecho imponible, torna ilegítima la obligación fiscal por carecer de debida causa, lo cual no implica que la norma en su aspecto genérico devenga inconstitucional. Si el fisco hubiera prestado el servicio vinculado al cobro del tributo no existiría reproche legal y/o constitucional alguno.-

#### 5.4 Debida afectación de los recursos originados en una tasa / Principio de razonabilidad

Tal como se indicó *supra* --ver punto 2-- la cuantificación de la obligación fiscal referida a una tasa debe tener una relación de razonabilidad con el costo general del servicio, sin realizar una equivalencia estricta y proporcional a los gastos de la oficina que los presta, i.e. se deben contemplar los costos directos e indirectos atribuibles a la prestación del servicio --ver en cuanto a este punto, CSJN Fallos 234:663; 277:218; 312:1575; 319:2211; 343:1688; SCJBA "Acuerdos y Sentencias", 1957IV542; 1962II1094; 1966II17; causas I. 824, "Alicurá", "D.J.B.A.", t. 116, p. 413; I. 825, "La Constancia", "D.J.B.A.", t. 116, p. 457; I. 1139, "Sanatorio Argentino S.A.", sent. 22.11.83; I. 1243, "Empresa Hípica Argentina S.A.", sent. 6.9.88; I. 1517, "Lactona Sociedad Anónima" 27.6.95; act. I 1992 "Aguas Argentinas SA" 7.3.05, B. 52.173 y B. 51.937 "Empresa Nobleza Picardo SAIC y F", ambas sents. del 28.11.95; B. 53.450 "Molinos Río de la Plata S.A.", sent. del 3.3.98; A. 71.396 "YPF S.A. c/ Municipalidad de Vicente López s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", sent. del 9.9.15; B. 65.396 "Esso Petrolera Argentina SRL c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa", sent. del 22.6.16; B. 63.520 "Telefónica Móviles Argentina S.A. c/ Municipalidad de Moreno. Demanda contencioso administrativa", sent. del 9.5.18, entre otras

La CSJN --voto del Dr. Lorenzetti-- ha especificado con claridad en relación a esta característica jurídica de las tasas municipales:

*"...la suma dineraria que se cobra debe tener un vínculo razonable con la prestación del servicio. En este sentido, esta Corte ha indicado que el "pago de tasas o servicios... finca en una contraprestación aproximadamente equivalente al costo del servicio prestado" (arg. Fallos: 192:139) y que resulta necesario que el monto de la tasa y el costo del servicio guarden cierta relación, sin que ello deba interpretarse como una equivalencia estricta, prácticamente imposible de establecer (arg. Fallos: 201:545; 234:663, entre otros). Ello es así pues, desde el punto de vista de la cuantía global de la tasa, ella no puede superar más allá de un límite discreto y razonable el costo del servicio, toda vez que no puede admitirse que con el ingreso obtenido por la prestación de un servicio divisible se financien otros servicios --divisibles o indivisibles-- y aun funciones del gobierno municipal.*

*En efecto, una interpretación contraria importaría desnaturalizar la esencia de la tasa ya que, si se exige un servicio de tales características, consecuencia lógica de ello es la razonable relación entre ambos elementos.*

*El juicio de razonabilidad exige una proporción entre el costo del servicio que el legislador decidió que debía prestarse y el monto de lo recaudado por el tributo que el mismo legislador eligió para financiar ese servicio --y no otro--, en tanto tiene que existir una determinada ligazón entre el aspecto material del hecho imponible y el cuantitativo.*

*Este control de razonabilidad es aplicable también cuando se utiliza la capacidad contributiva como parámetro ya que, si bien esto puede ser legítimo (Fallos: 234:663; 277:218, entre otros), no puede haber un resultado desproporcionado o disociado del gasto que demanda la prestación del servicio." --Fallos 344:2123 "Esso".-*

La estricta competencia del legislador para elaborar la política financiera del Estado y determinar la medida en que los contribuyentes deben aportar para la formación del erario, no inhibe que la tasa, por su naturaleza tributaria, requiera la existencia de una razonable equivalencia entre la obligación tributaria y las necesidades financieras --o costo general-- atribuibles a la prestación del servicio --cfme., Spisso R., Derecho Constitucional Tributario, ed. Abeledo-Perrot SA, 2011, pág. 38/39; García Belsunce H., Impuestos y tasas municipales, Temas de Derecho Tributario, Abeledo-Perrot, 1982, pág 216/217; ver en particular el meduloso análisis de Shaw José L., Las tasas y su diferenciación de otros ingresos estatales, en Tasas Municipales, dir., Bulit Goñi, tomo I, pág. 60/96--.

Caso contrario, i.e., si el destino de la obligación fiscal correspondiente a una tasa se aplicara en forma principal a solventar los gastos generales del municipio --sin limitación alguna--, se desnaturalizaría el concepto de "tasa" como especie tributaria y se generarían verdaderos impuestos encubiertos, con la posible afectación a las distintas competencias y limitaciones que surgen de la Ley de Participación Federal de Impuestos 23.548.-

Así deben computarse a los efectos de establecer la antes señalada, "razonable equivalencia", los costos directos e indirectos --i.e. una parte proporcional del monto de gastos generales que determina la existencia misma del municipio--, atribuibles al servicio. Por ello, los ingresos atribuibles a la tasa no son de libre disponibilidad para el municipio, sino que deben imputarse en forma razonable a los costos directos e indirectos atribuibles a la prestación del servicio.-

Adviértase que el control judicial antes señalado, solo procede cuando se configura una situación clara de afectación a la "razonable equivalencia", i.e., en situaciones de menor cuantía no procede tal análisis, debiendo estarse a la decisión del legislador para elaborar la política financiera del Estado.-

De la pericia del ingeniero civil surge que el presupuesto del municipio es adecuado para la cantidad de máquinas disponibles y el nivel de inversión necesario para mantener la red vial en óptimas condiciones. Sin embargo, el perito sostiene que pese a que el presupuesto permite disponer de una red vial en condiciones muy buenas en el 70% de su extensión, solo el 4% presenta esa característica. Asimismo estima que en el año 2023 solo el 17% del presupuesto tuvo contraprestación en servicios efectivamente prestados, mientras que en el 2022 solo el 10% fue aplicado a las tareas.-

Por otro lado, de la pericia contable surgen los importes devengados correspondientes a las obligaciones fiscales generadas por la tasa cuestionada atribuibles a los periodos 2022 y 2023. Para el período 2022 \$ 286.504.498,70 y para el año 2023 \$ 474.348.684,63.-

Asimismo, la ley 13.010 creó el Fondo Compensador de Manteniendo y Obras Viales, estableciendo que su composición estará integrada por un porcentaje del impuesto inmobiliario rural. Sus recursos serán distribuidos entre los municipios en proporción a la longitud de kilómetros de caminos rurales del partido, con una afectación específica al mantenimiento y a la realización de obras de la red vial provincial de tierra --arts. 1, 2, 3 y cc, ley cit.--.

La ord. 2.226/17 creó el Fondo para alteos de caminos del distrito de Daireaux, compuesto por el 12% de lo que se recaude en concepto de tasa vial, los recursos provenientes de otras jurisdicciones nación y provincia, y las donaciones de productores, fundaciones u otros

ámbitos privados. El objeto del fondo es financiar el estudio y la ejecución de proyectos de alteos de caminos y colocación de alcantarillas --arts. 2 y 3--.-

Los recursos que la provincia transfiera al municipio originados el fondo previsto en los art. 1 a 5 de la ley 13.010, y aquellos originados en la tasa pueden afectarse, en los términos de la ordenanza antes señalada, a la realización de obras de alteo o colocación de alcantarilla, en caminos de tierra pertenecientes a la red vial provincial, debido a que tales obras integran el concepto de mantenimiento y realización de obras previsto en el art. 2 y 4 de la citada norma, y abarcan las obligaciones genéricas atinentes a los servicios que deben prestarse vinculados a la tasa de mantenimiento, conservación y mejora de caminos rurales.-

Toda vez que los fondos antes señalados tienen una asignación específica --mantenimiento y realización de obras de la red vial provincial de tierra--, deben computarse a los efectos de establecer la razonabilidad de la cuantificación de la tasa cuestionada --advirtase, a cualquier efecto, que son los mismos contribuyentes los que abonan el impuesto inmobiliario rural y la tasa de conservación de caminos rurales--.-

El perito informa que por ingresos tributarios atribuibles al fondo compensador de mantenimiento y obras viales --coparticipación de impuestos-- se devengaron los siguientes recursos: año 2022 \$ 58.084.941,04 y por el año 2023 \$ 89.742.440,67.-

Así para atender al servicio vinculado a la tasa se encuentra acreditado un ingreso total devengado por parte del municipio de:

- i) año 2022 \$ 344.589.439,74 --i.e., \$ 286.504.498,70 tasa, más \$ 58.084.941,04 transferencia provincial--; y
- ii) año 2023 \$ 564.091.125,03 --i.e., \$ 474.348.684,63 tasa, más \$ 89.742.440,67 transferencia provincial--.-

Se advierte que a los efectos de la ponderación de la relación entre los recursos y costos originados en el tributo se utilizan los ingresos y gastos devengados --informados en la pericia contable--, ya que estos representan la real entidad del recurso y/o erogación generado. Asimismo ese importe define la obligación fiscal que deben asumir cada uno de los contribuyentes --actores en la presente causa--.-

La posible morosidad en el cobro de la obligación fiscal es un componente financiero, que no hace a la existencia de la obligación. Asimismo, atento ser un tributo cuya base imponible se constituye por la titularidad de bienes inmuebles rurales que, *prima facie*, garantizan su cobro, la posible mora en la percepción no puede vincularse a un índice real de incobrabilidad, y depende en gran medida de las acciones de orden administrativo y/o judicial que inicie la comuna.-

En relación a los costos atribuibles a la prestación del servicio vinculado a la tasa, el perito contador informa para el período 2022 gastos devengados atribuibles a costos directos por \$ 184.287.108,14 y para el período 2023 por \$ 275.268.491,02.-

De la pericia se observa que los costos informados corresponden a gastos directos atribuibles al servicio de mantenimiento, conservación y mejorado de la red vial. Preguntado al perito la posibilidad de establecer conforme la técnica contable el cálculo en forma cierta o presunta de los gastos indirectos atribuibles al servicio, manifestó que cualquier cálculo que se efectúe, no contará con bases sólidas o coherente que lo sustente --ver presentación del 11.2.26--.-

A cualquier efecto, debe advertirse que el municipio no es ajeno a la carga de probar el costo general correspondiente a la prestación del servicio --incluidos los gastos indirectos--. Así la CSJN ha expresado: "*la carga de probar el costo del servicio de mantenimiento de calles pavimentadas y de tierra no puede imponerse a la empresa de transporte, pues constituiría una exigencia procesal de imposible cumplimiento que frustraría el derecho sustancial.*" --Fallos 319:2211--.-

Atento la imposibilidad expuesta por el perito, y la omisión de las partes de establecer la incidencia real de los costos indirectos --advirtase que ellos deberían representar una proporción de los gastos generales del municipios que se comparten entre todos los recursos municipales--, y a los efectos se establece la posible afectación al principio de "razonable equivalencia" antes señalado, deben estimarse judicialmente en forma presunta --con la problemática que ello presenta--, con un margen de razonabilidad, el importe que puede ser atribuido a los costos indirectos devengados por la generación del tributo.-

A tal fin se considerara --intentando establecer una concepción lo más amplia posible en la cuantificación del gasto indirecto--, el porcentaje que la CSJN establece para considerar la confiscatoriedad de un tributo, i.e. el 33% de la obligación total devengada correspondiente a la tasa --ver Fallos 206:247; 209:116; 210:313; 236:23; 239:160; 318:785--.-

En atención a ello se estima:

- i) para el período 2022 un importe de gastos devengados indirectos atribuibles a la prestación de la tasa de \$ 94.546.484,57 --33 % de \$ 286.504.498,70 total de la obligación fiscal devengada. Representa aprox. un 51% de los gastos directos de ese período--; y

ii) para el período 2023 un importe de gastos indirectos atribuibles a la prestación de la tasa de \$ 156.535.065,93 --33 % de \$ 474.348.684,63 total de la obligación fiscal devengada. Representa aprox. un 57% de los gastos directos de ese período--.-

Al ser ello así el costo general estimado del servicio se establece en:

i) período 2022 \$ 278.833.592,71 --i.e. \$ 184.287.108,14 de costos directos informados por el perito más \$ 94.546.484,57 previamente estimados correspondientes a costos indirectos--; y

ii) período 2023 \$ 431.803.556,95 --i.e. \$ 275.268.491,02 de costos directos informados por el perito más \$ 156.535.065,93 previamente estimados correspondientes a costos indirectos--.-

A los efectos de hacer la ponderación de la "razonable equivalencia" entre los costos generales y los ingresos atribuibles a la obligación fiscal se considera:

i) para el año 2022 un ingreso total devengado de \$ 344.589.439,74 y un gasto total estimativo devengado de \$ 278.833.592,71; y

ii) año 2023 un ingreso total devengado de \$ 564.091.125,03 y un gasto estimativo devengado \$ 431.803.556,95.-

Para el año 2022 existe una desproporción de \$ 65.755.847 entre la integridad de los recursos devengados con los cuales se debe brindar el servicio --\$ 344.589.439,74-- y la totalidad de los gastos generales devengados estimados --\$ 278.833.592,71--. Lo que representa un 22,95 % de la obligación fiscal total devengada .-

Para el año 2023 existe una desproporción de \$ 132.287.568,08 entre la integridad de los recursos con los cuales se debe brindar el servicio --\$ 564.091.125,03-- y la totalidad de los gastos generales devengados estimados --\$ 431.803.556,95--. Lo que representa un 27,88 % de la obligación fiscal total devengada.-

Toda vez que para el año 2024 se omitió la realización de la pericia contable, no puede estimarse la existencia de la razonable equivalencia entre los ingresos y gastos devengados atribuible a dicho período.-

Al ser ello así corresponde declarar que la obligación fiscal correspondiente a los períodos 2022 y 2023 de la tasa de conservación, mantenimiento y mejorado de caminos carece de razonable proporción entre los ingresos y gastos en la porción del monto en que consiste el exceso ante señalado --cfme. CSJN Fallos 211:1033; 234:130; 235:883; 265:372--.-

Así se acredita que el importe de la tasa cuestionada vulnera el principio de razonabilidad y constituye un importe desproporcionado entre la obligación fiscal y los costos directos e indirectos que debe afrontar el municipio para organizar y poner a disposición el servicio --art. 17, 28, 33 y cc CN; CSJN, Fallos 344:2123--.-

## 6.- Tasa de Marcas y Señales

Los actores solicitan la inconstitucionalidad de la tasa de marcas y señales prevista en los arts. 138 a 151 de la OF 618/97.-

Dicho tributo se cobra por el registro y gestión de la identificación de hacienda para su traslado dentro o fuera del municipio.-

Al ser ello así, los legitimados pasivos de la obligación tributaria son, en principio, los titulares de la hacienda que requieran marcas y/o la expedición de las guías de transporte.-

Los actores no acreditaron tener legitimación para la impugnación de la ordenanza --i.e., la existencia de un nexo lógico con el reclamo que se procura satisfacer, cfme., CSJN Fallos 331:2287 "Iannuzzi"; SCJBA causas B. 62.428 "Costadinoff" del 26.8.09; B. 65.394 "Aristi" del 28.9.05--.-

La legitimación procesal configura un presupuesto para la existencia de un "caso" o "controversia" --art. 31, CCA; cfme., CSJN, causa "Defensor del Pueblo de la Nación c/Estado Nacional Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (monotributo) dto. 885/98 s/ amparo ley 16.986", del 21.8.03; Fallos 323:4098 "Colegio Público de Abogados de la Capital Federal"--.-

La aptitud de ser parte en un proceso, denominada *legitimatío ad causam*, constituye un requisito subjetivo de la pretensión que supone la titularidad activa o pasiva de la relación jurídica sustancial, de ahí que la persona legitimada en un determinado proceso es aquella revestida por la ley para discutir el objeto sobre el que versa el litigio --cfme., SCJBA; B 63.995, "Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires", sent. del 11.4.12; Palacios L., "Derecho Procesal Civil", Abeledo Perrot, T. I., pág. 406 y ss--.-

La falta de legitimación procede cuando alguna de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión -cfme., CSJN, Fallos 310:2943 "Ogando"; 317:1615 "Paloika"; CCASM causas N° 4.355/14 "Villarruel" del 23.11.15; 6.062/17 "Alcala"

del 30.5.17; 8.403 "Piratte," del 25.2.21--.-

La CSJN tiene dicho que, al momento de sentenciar, el perjuicio o lesión debe ser actual, dado que sin su presencia, no existiría una causa o controversia entre las partes que requiera la intervención de la jurisdicción --CSJN, Fallos 348:967; 451:801, entre otros--.-

Conforme lo expuesto, si bien los actores, son titulares de inmuebles rurales del partido de Daireaux no acreditaron en forma cierta o razonablemente presunta ser sujetos pasivos del tributo.-

Ser propietario de un inmueble rural no implica necesariamente la legitimación para demandar la inconstitucionalidad de la tasa de marcas y señales. Adviértase que el inmueble puede estar destinado a la actividad agrícola o bien ser objeto de arrendamiento.-

Por ello, los actores debieron acreditar que por su actividad, eran sujetos pasivos de la tasa de "guías", es decir, que su actividad o parte de ella era la cría y venta de ganado.-

En el presente caso, no surge acreditado la actividad a la cual se dedican --producción ganadera, agrícola o, si tienen los predios arrendados--.-

Tampoco acreditaron haber hecho uso de guías expedidas por el municipio, ni ser titulares de alguna marca en el registro provincial correspondiente. Adviértase, a cualquier efecto, que no nos encontramos frente a un tributo de alcance masivo que pueda gravar la actividad de cualquier ciudadano.-

Es decir, no surge acreditada la legitimación activa, que permita analizar la constitucionalidad de la tasa de marcas y señales.-

Adviértase, atento el objeto de la pretensión, que no es posible fundar la legitimación para accionar en el mero y personal interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes --cfme., CSJN Fallos 327:2512 "Díaz"; 331:1364 "Zatloukal"; 331:2287 "Iannuzzi"; 337:627 "Universidad Nacional de Río Cuarto"; SCJBA causa B 65.100 "Acción de Amparo contra Estado de la Provincia de Buenos Aires" del 10.10.07--.-

Por ello, no acreditada la legitimación de los actores como destinatarios de la tasa de marcas y señales corresponde el rechazo de la pretensión.-

Por otro lado el planteo de nulidad e inconstitucionalidad del art. 19 último párr. de la OI 2.569/24, que requería no registrar deudas con el municipio, para solicitar la emisión de las guías de transporte, deviene abstracto debido a que dicha norma fue dejada sin efecto por la ord. 2.586/24.-

Los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal sólo mientras se mantenga un real interés del accionante. Aunque la causa de una pretensión haya podido presentarse inicialmente como concreta es factible que con posterioridad se torne abstracta. Así, este proceso en relación al art. 19 de la ord. 2.569/2024 carece de objeto actual, en la medida en que ha desaparecido el presupuesto fáctico que dio lugar al agravio del actor --cfme., Fallos 216:147; 231:288; 243:146; 244:298; 253:346; 259:76; 267:499; 307:2061; 308:1087; 310:670; 312:995; 313:701; arg. 313:1497; arg. 315:46, 1185, 2074, 2092; 316:664; 318:550; 320:2603; 322:1436, entre muchos otros--.-

8.- Asimismo corresponde disponer la nulidad de los actos administrativos individuales dictados por el Intendente de la municipalidad en los exptes. adm. 422-12542/2022; 422-12543/2022, 422-12539/2022, y 422-12536/2022, referidos a los actores, en tanto no se adecuan a los fundamentos de hecho y de derecho previamente analizados en relación a la ilegitimidad parcial de la tasa --art. 240 LOM--.-

En razón de lo expuesto **RESUELVO**

1.- Declarar que el Municipio de Daireaux no prestó los servicios correspondientes a la tasa de mantenimiento de red vial correspondiente a las parcelas 349a, 349b y 343 --titularidad de Susana de la Serna-- durante los años 2022, 2023 y 2024. Así deviene ilegítima e inconstitucional la pretensión fiscal y/o pago del tributo por los períodos mencionados --arts. 17 CN y 31 CP--.-

2.- Rechazar la demanda en relación a las parcelas 538a, 536a, 534a, 570a, 569 y 568 --pertenecientes a Pedro José Cornejo y El Matico SA--, y las parcelas 325C, 316, 269g, 169f, 318 y 322 --titularidad de SACFIL SA--, al haberse acreditado que el Municipio brindó parcialmente el servicio de mantenimiento de la red vial durante los años 2022, 2023 y 2024.-

3.- Declarar que para el período 2022 existe una desproporción irrazonable entre la integridad de los recursos y gastos devengados correspondientes a la tasa de mantenimiento de red vial, que implica la ilegitimidad del 22,95 % de la obligación fiscal devengada --arts. 17 CN y 31 CP--.-

4.- Declarar que para el período 2023 existe una desproporción irrazonable entre la integridad de los recursos y gastos devengados correspondientes a la tasa de mantenimiento de red vial, que implica la ilegitimidad del 27,88 % de la obligación fiscal devengada --arts. 17 CN y 31 CP--.-

5.- Disponer la nulidad de los actos administrativos individuales dictados por el Intendente de la municipalidad en los exptes. adm. 422-12542/2022; 422-12543/2022, 422-12539/2022, y 422-12536/2022, referidos a los actores, en tanto no se adecuan a los fundamentos de hecho y de derecho previamente analizados en relación a la ilegitimidad parcial de la tasa --art. 240 LOM--

6.- Rechazar el resto de las pretensiones interpuestas.-

7.- Imponer las costas en razón de los mutuos vencimientos --art. 51 CCA--.-

8.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.-

Regístrese. Notifíquese.-

Pablo C. Germain

Juez Contencioso Administrativo

----- Para copiar y pegar el texto seleccione hasta aquí (sin incluir esta línea) -----



GERMAIN Pablo Cristian  
JUEZ

[Volver al expediente](#) [Volver a la búsqueda](#) [Imprimir](#) ^